

DELITO: Secuestro agravado y Tráfico ilícito de drogas (art. 3 Ley 20.000)

RIT N°: 431-2024

RUC N°: 2300200789-4

Santiago, veintidós de mayo de dos mil veinticinco.

VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, ante este Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, constituido por las Magistradas María Alejandra Cuadra Galarce, en calidad de Presidenta de Sala, María José García Ramírez y Paulina Sariego Egnem, como integrante y redactora respectivamente, se llevó a efecto juicio oral, en causa seguida en contra de **EDUARDO ANTONIO CERDA OLEA**, cédula nacional de identidad N°9.578.502-6, nacido en Santiago, el 24 de agosto de 1965, 59 años, divorciado, administrador de estacionamientos, domiciliado en Calle Radal 1990, comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana; **MARIA VICTORIA SEPULVEDA MAC-LEAN**, cédula de identidad N°15.425.962-7, nacida en Santiago, el 30 de julio de 1982, 42 años, casada, peluquera, domiciliada en Calle Radal 1990, comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana; y **NILTON ISRAEL DORADOR MORALES**, cédula nacional de identidad 13.454.403-1, nacido en Santiago, el 15 de mayo de 1978, 47 años, soltero, mecánico automotriz, domiciliado en Calle Radal 1990, comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana.

Sostuvo la acusación el Ministerio Público, representado por el Fiscal, señor **Alfredo Cerri Grilli**. Adhirió a la acusación el querellante **Ricardo Romo Manzo**, en representación de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana de Santiago, en tanto, la Defensa del imputado Eduardo Antonio Cerda Olea fue asumida por el Defensor Penal Público **Matías Mardones Vásquez**, y la defensa de los imputados María Victoria Sepúlveda Mac-Lean y Nilton Israel Dorador Morales fue asumida por los Defensores Penales Privados **Gabriel Marilao Tobar** y **Benjamín Escobar Marilao**. Todos los intervinientes con domicilio y forma de notificación registrada en el Tribunal.

SEGUNDO: Acusación. Que, el Ministerio Público, al deducir acusación en contra de los inculpados, según se lee en el auto de apertura de juicio oral, la fundó en los siguientes términos:

“1.- HECHOS: Que el día 07 de enero de 2023, cerca de las 16:00 horas, mientras la víctima Juan Marcelo ALVARADO FLORES, se encontraba trabajando cuidando autos en la intersección de calle Jujuy con Salvador Gutiérrez, en la comuna de Quinta

Normal, llegó un automóvil marca Hyundai, color gris, desde el cual descendieron 02 personas en proceso de identificación y apodadas como "Raúl, el chino" (copiloto) y un sujeto de nacionalidad venezolano apodado "Crown" (conductor), quienes subieron por la fuerza a la víctima Juan Marcelo ALVARADO FLORES al vehículo, señalando que debía ir con ellos para arreglar un problema, trasladándolo contra su voluntad hasta el inmueble ubicado en calle Radal N°1990, comuna de Quinta Normal, lugar donde le sustrajeron su billetera que contenía su cédula de identidad y \$22.000 (veintidós mil pesos) en efectivo, además, fue increpado por estos 2 sujetos, quienes le señalaron que debía asumir el robo de un paquete de droga extraviado días previos, propinándole golpes de pies y puño en reiteradas ocasiones, utilizando en ocasiones diferentes elementos contundentes.

Posteriormente por instrucciones del imputado Nilton Israel DORADOR MORALES fue colgado y amarrado de pies y manos, y le extrajeron uno de sus dientes superiores con un alicate, ingresando al lugar el imputado Nilton Israel DORADOR MORALES, quien lo amenazó para que asumiera el robo de la droga, y ante la negativa de la víctima, lo apuñaló con un cuchillo en su glúteo derecho, ordenando a "Raúl" y "Crown" que continuaran con las agresiones, quienes procedieron a obligarlo a beber alcohol, mientras que "Raúl" cortó la primera falange del dedo anular de su mano izquierda utilizando un cuchillo.

Posteriormente llegó hasta el lugar la pareja de Dorador Morales, correspondiente a la imputada María Victoria SEPÚLVEDA MAC-LEAN, quien vertió agua hirviendo sobre su espalda, cuello, piernas y brazos de la víctima en 2 ocasiones, mientras este se encontraba en el suelo maniatado de pies y manos.

Adicionalmente en el lugar se encontraba el imputado Eduardo Antonio CERDA OLEA, quien es el encargado del domicilio y lo facilitaba a los imputados DORADOR y SEPÚLVEDA para distribuir droga en el sector, el cual mientras presenciaba las agresiones sufridas por la víctima lo amenazaba indicándole que le "CORTARÍA LA CABEZA" si se atrevía a realizar una denuncia por lo ocurrido.

Finalmente la víctima es trasladada hasta su carpa ubicada en calle Jujuy con Salvador Gutiérrez, lugar desde el cual logró escapar a eso de las 06:00 horas del día 08 de enero de 2023, solicitando ayuda a un vecino llamado "Alex", quien lo trasladó hasta el Consultorio GARIN, ubicado en calle Janequeo N°5662, Quinta Normal, donde le realizaron los primeros auxilios, y luego de pasar por otros recintos hospitalarios, finalmente fue internado en la Clínica INDISA, debido a la gravedad de

sus lesiones, toda vez que resultó con el 24% de su cuerpo con quemaduras, sufriendo además lesiones producto de haber sido colgado para las torturas correspondientes a "desgarro del muslo Bíceps, rotura de ancho parcial y grosor subtotal del supraespinoso, Tendinosis del subescapular, irregularidad cortical del contorno anterosuperior de la cabeza humeral", estando internado por 38 días, siendo dado de alta el 17 de febrero de 2023, generándole los imputados lesiones de carácter grave.

El día 14 de marzo del año 2023, en virtud de autorización judicial otorgada por el 6° Juzgado de Garantía de Santiago, se ejecutó orden de detención, entrada, registro e incautación en los siguientes domicilios:

EN CALLE NUEVA EXTREMADURA N° 4966, DEPTO. N° 401, COMUNA DE QUINTA NORMAL: Se detuvo a la imputada María Victoria SEPÚLVEDA MAC-LEAN, incautándose en su poder 06 bolsas con Ketamina (2,38 gramos), 02 bolsas con Cannabis Sativa (1,92 gramos) y \$45.000 en efectivo.

En el interior del departamento se detuvo a Nilton Israel DORADOR MORALES, incautándose diversas especies, entre ellas, balanzas digitales, un frasco con 205,67 gramos de cocaína base, bolsas para dosificación, \$60.000 en efectivo, y varios frascos con Cannabis Sativa por un total de 701,43 gramos.

EN CALLE RADAL DEL OBISPO FRANCISCO ANABALÓN DUARTE N° 1990, COMUNA DE QUINTA NORMAL: Se detuvo a EDUARDO ANTONIO CERDA OLEA y se incautaron dos hervidores eléctricos. Adicionalmente, en el trabajo del Laboratorio de Criminalística se encontraron muestras con orientación química positiva a la presencia de sangre."

Calificación Jurídica, grado de desarrollo del delito y participación: El Ministerio Público estima que los hechos descritos respecto de los imputados Nilton Israel Dorador Morales, María Victoria Sepúlveda Mac-Lean y Eduardo Antonio Cerda Olea son constitutivos de los delitos consumados de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso 4° del Código Penal y tráfico ilícito de drogas, previsto y sancionado en el artículo 3 en relación al artículo 1 de la Ley 20.000.

A juicio de la Fiscalía, a los imputados les ha correspondido, según lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal, la calidad de autores de los delitos materia de la presente acusación, toda vez que han tenido una participación inmediata y directa en tales hechos.

Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal: A juicio de la Fiscalía, respecto de los acusados concurren las agravantes del artículo 12 N°4 del Código Penal y la del artículo 19 letra b) de la ley 20.000. No concurren atenuantes.

Pena solicitada por el Ministerio Público: Por tales consideraciones, la Fiscalía requiere se imponga a los imputados las siguientes penas: 20 años de presidio mayor en su grado máximo, como autores del delito de secuestro agravado, accesorias legales, comiso de todas las especies incautadas y condena en costas de la causa; y 16 años de presidio mayor en su grado máximo, como autores del delito de tráfico ilícito de drogas, multa de 200 unidades tributarias mensuales, accesorias legales, comiso de todas las especies incautadas y condena en costas de la causa.

TERCERO: Que, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana de Santiago, representada por el abogado Ricardo Francisco Romo Manzo, actuando como parte querellante, se adhirió íntegramente a la acusación formulada por el Ministerio Público, sin realizar modificaciones ni adiciones a las imputaciones, calificaciones jurídicas, circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y peticiones de pena formuladas por la Fiscalía en contra de los acusados.

CUARTO: Alegatos de inicio. En su alegato de apertura, la **Fiscalía** expuso que la presente investigación se originó con la denuncia de una persona en situación de calle que refirió haber sido secuestrada. La investigación reveló que los imputados operaban en dos domicilios cercanos en la comuna de Quinta Normal, en calle Radal 1990 y Nueva Extremadura 4966, departamento 401, donde vivían María Victoria Sepúlveda y Nilton Dorador. Explicó que la víctima estuvo hospitalizada durante 38 días debido a la gravedad de las lesiones sufridas. A pesar del tiempo transcurrido entre los hechos y la denuncia, la Policía de Investigaciones logró individualizar a los imputados mediante diversos medios, incluyendo el programa Denuncia Seguro y registros policiales previos.

Destacó que durante los allanamientos se encontró evidencia consistente con la declaración de la víctima, tales como hervidores utilizados para quemarla, un cuchillo tipo corta cartón con sangre, y otros elementos que corroboran la dinámica de los hechos. Indicó que las acciones de los imputados no solo constituían secuestro con grave daño del artículo 141 del Código Penal, sino también la agravante de ensañamiento del artículo 12 N°4, ya que la víctima sufrió quemaduras en el 24% de su cuerpo, lo que le generó un daño que excede el tipo penal en cuestión.

Adelantó que presentará los testimonios de diversos funcionarios policiales, peritos y la declaración anticipada de la víctima para acreditar, más allá de toda duda razonable, la acusación y las agravantes invocadas.

Por su parte, el **querellante** se refirió asimismo a los argumentos mencionados por el Ministerio Público, enfatizando la gravedad de las lesiones realizadas a la víctima. Mencionó que durante el juicio se demostrará que la víctima fue apuñalada, se le extrajo una pieza dental, fue quemada y se le mutiló uno de sus dedos.

Destacó la vinculación entre el delito de secuestro y el tráfico de drogas, señalando que los acusados se dedicaban a esta actividad, y el secuestro se produjo por un asunto relacionado con drogas. Mencionó que esta vinculación permitirá acreditar la agravante del artículo 19 letra d) de la ley 20.000.

Expuso que comparecía a juicio representando a la autoridad encargada de la seguridad pública en la Región Metropolitana, afirmando que estos delitos atentaban gravemente la seguridad pública.

Otorgada la palabra a la **Defensa de Eduardo Cerda Olea**, sostuvo que la prueba será insuficiente para acreditar la participación de su representado en los hechos descritos. Refirió que el acusado Cerda administraba el domicilio en Radal, donde supuestamente se distribuía droga, afirmando que presentará prueba documental y testimonial para desmentir los hechos.

Respecto al delito de secuestro, argumentó que la acusación se basaba en que su representado habría proferido amenazas mientras se producían las agresiones, lo que será descartado por las declaraciones que se presentarán durante el juicio, incluyendo la de la propia víctima.

Coincidió con el querellante en que el secuestro estuvo vinculado al tráfico de drogas, sin embargo, sostuvo que su representado no tenía motivación alguna para participar en ese delito, adelantando que prestará declaración para esclarecer los hechos y su contexto. Expuso que presentará tres testigos y prueba documental que desvinculará al acusado Cerda de las imputaciones, razón por la que solicitará su absolución.

La Defensa de los acusados **Sepúlveda Mac-Lean y Dorador Morales**, indicó que no se probarán los ilícitos por los cuales fueron acusados sus representados. Señaló que la versión de la víctima, que fue la fuente principal de la investigación, establecerá que sus representados no tuvieron participación en el delito de secuestro, por lo que solicitó la absolución de ambos acusados a este respecto. En lo referente

al ilícito de tráfico de drogas del artículo 3 de la Ley 20.000, solicitó la recalificación a microtráfico del artículo 4 del mismo cuerpo legal, afirmando que la prueba del Ministerio Público demostrará tal circunstancia.

QUINTO: Declaración como medio de defensa. Que, advertido los acusados de su derecho a guardar silencio, manifestaron Dorador y Sepúlveda acogerse al mismo, en tanto el encartado Eduardo Cerda Olea decidió prestar declaración, previas advertencias legales.

Sobre los hechos, expuso cómo llegó a habitar en el 2017, la casa familiar de sus abuelos ubicada en calle Radal, una propiedad de aproximadamente 1.000 metros cuadrados, con 180 metros construidos y un jardín que junto a su hermano transformaron en un estacionamiento para cerca de 30 vehículos. A los dos meses de vivir allí con su hijo Daniel Cerda de 13 años, éste falleció debido a una bacteria. Posteriormente, siguió viviendo con su hermano, quien también falleció al año siguiente. Quedó solo en esa casa, expuesto a robos de los vehículos, en una ocasión cayó detenido por receptación, pero luego quedó absuelto. En ese contexto conoció a la señora Victoria, quien llegó a verlo a la Comisaría con víveres. Posteriormente, les ofreció su casa a Victoria y Nilton para que comenzaran un negocio de peluquería y estacionamiento. Ellos se preocupaban por él, de su alimentación, no lo dejaban drogarse, manifestando que fueron su única familia y lo protegieron de la delincuencia.

Admitió haber caído en drogas y asumió su responsabilidad en el microtráfico que ocurría en la casa, reconociendo que él también consumía más que lo que traficaba. Explicó que vendió sus derechos de herencia de la casa de sus abuelos en \$1.000.000.- a Nilton, a través de una cesión de derechos en una notaría, en enero de 2022. Les arrendó el espacio para un taller de autos, mientras Victoria propuso arrendar un local para instalar un salón de belleza, Nilton pavimentó parte del terreno para mejorar el estacionamiento. En ese momento solo quería morir y no quería vivir en la propiedad. Tres o cuatro meses después llegó una persona llamada Raúl Silva "el chino" a vender carne, a quien le arrendaron una pieza. La señora Victoria administraba los dineros pero no venía a la casa debido a la tierra que había por las obras. Con la llegada de Silva comenzó "el dilema de Sodoma y Gomorra", Silva sabía sobre su consumo de droga y se aprovechó de ello. Silva esperaba que Nilton se fuera de la casa, alrededor de las 19:00 horas, y le pasaba pasta base y Tusi. Lo tenía intimidado, ya que Silva portaba un bastón de trekking afilado en las puntas, indicando

haber sido cobarde por no haberle puesto fin a lo que estaba comenzando. Mencionó que los vecinos le advertían que se iría preso.

El día de los hechos, se levantó a las 15:00 horas, y, al salir al baño vio en la mitad de la propiedad, específicamente en la pieza donde residía Raúl Silva, que éste entraba y salía junto con un maestro venezolano apodado "Crosti" (Crown). Observó un movimiento, pelea entre ellos y divisó a don Marcelo, que trabajaba en la casa y la había pintado, adentro de la pieza, maniatado, con las manos amarradas. Observó que Silva entraba y salía de la cocina. Luego vio que don Marcelo estaba en la ducha, supervisado por un peruano, mientras en la puerta estaba "Crosti" (Crown). Posteriormente, vio a Marcelo tirado en un sillón con un peruano que vivía con él en "el Ruco". En ese momento, Marcelo le dijo *"don Eduardo, no he robado nada a don Raúl"*, refiriéndose a las herramientas y droga que había desaparecido, pero él le respondió que no podía denunciar porque le cortarían la cabeza, negando haberlo amenazado.

Salió hacia la calle por el patio, estando confundido, y aproximadamente diez minutos después Nilton, que estaba en el taller, lo llamó para avisarle que el almuerzo estaba listo. Más tarde vio salir a don Marcelo y al peruano, momento en que decidió enfrentar a Raúl Silva, les dijo que lo que había hecho era un atentado a los derechos humanos, Nilton escuchó esto y vino a prestarle ayuda. Nilton se fue alrededor de las 18:00 horas y esa noche Silva lo drogó y cuando despertó en la noche tenía un destornillador en el recto. Nilton le sacó el destornillador y le dijo que esto no se debía saber. Al día siguiente, enfrentó a Silva y le dijo que lo metería preso por lo que había hecho con él y don Marcelo. Afirmó que estuvo un mes con su cara desfigurada, era imposible que denunciara.

Finalmente, solicitó no ser juzgado por algo que no hizo, reiterando que no evadiría su responsabilidad.

A las preguntas de su **defensa**, afirmó que su frase: "consumía más que traficaba", significaba que se gastaba toda la plata en eso, por eso se la pasaba a doña Vicky y ella le mandaba dinero a sus hijas. Reconoció que consumía y permitía el tráfico, considerando que era lo mismo. En alguna oportunidad le pidió a su hija Claudia que lo internara porque estaba consumiendo pasta, y ella iba a empezar a hacer los trámites. No le contó a su hija sobre las agresiones de Silva, tampoco lo del destornillador.

Respecto al día en que Marcelo fue agredido, reiteró que vio a Raúl Silva y a "Crosti" (Crown) con Marcelo, maniatado en la pieza. Conversó con Marcelo cuando estaba con el peruano en el sillón, tenía la cara hinchada pero no le vio sangre, probablemente porque se había duchado antes. En ese momento, Marcelo le dijo: *"mire don Eduardo lo que me hizo el chino"*, a lo que él respondió que no podía hacer nada porque si denunciaba le cortaban la cabeza". Preciso que vio a Silva y "Crosti" (Crown) con Marcelo, escuchó una pelea, seguramente cuando lo maniataban, luego lo vio duchándose y después en la terraza, transcurrió una hora hasta ese momento. Negó haberlo amenazado.

Estuvo varias veces en el domicilio de Nueva Extremadura, donde vivía Nilton, iba a buscar comida que Nilton le ofrecía o marihuana, aunque Nilton nunca quiso que se drogara. Nilton tenía una hija en común de 5 años con Victoria, pero ésta vivía en otro lugar, lejos, desconociendo detalles. Victoria le dejaba las platas, y en el departamento de Nilton estaba "la chiquitita", a quien la señora Victoria iba a dejar.

Respecto al personal que trabajaba en la casa de Radal, mencionó que en el taller estaba Nilton, su hermano Rodrigo Dorador y los hombres que trabajaban en los autos. También estaba "Crosti" (Crown) que estaba a cargo de cuatro maestros venezolanos que remodelaron el salón de belleza, además de otros maestros a cargo del movimiento de tierra, calculando que en total eran cerca de 10 personas que ingresaban diariamente a la casa.

Contrainterrogado por el Ministerio Público, manifestó que conoció a Nilton y Victoria en el año 2017, cuando se fue a vivir a la casa. Sobre el microtráfico en su domicilio, afirmó que la pareja no trabajaba en eso, sino que participaban de esa actividad Raúl Silva y el venezolano. Preciso que el tráfico comenzó en el 2022, cuando llegó a vivir Raúl, quien llevaba 6 meses viviendo allí, en la pieza del centro de la casa, donde maniataron a Marcelo. Se enteró que Raúl se había suicidado.

Respecto a los hechos ocurridos en el 2023, declaró que al momento de la detención Silva ya no estaba en la casa porque la señora Victoria lo expulsó y solo venía esporádicamente a buscar cosas o pedir ducha. Afirmó que no denunció los hechos, cuestionando el fiscal que, no obstante, habían tenido la valentía de sacarlo del lugar, explicando el acusado que lo sacaron porque era peligroso y él terminaría muerto.

Reiteró que fue testigo de los hechos, vio a Marcelo vestido en la terraza, no vio lesiones, tenía la cara hinchada, no escuchó gritos, probablemente porque estaba

amordazado. Sólo vio a Nilton cuando éste estaba en el taller que se ubicaba en el mismo terrero, en un costado hacia el fondo, no en la casa donde ocurrieron los hechos.

Insistió en que en el domicilio de Radal la pareja no traficaba droga y que nunca los vio vendiendo, afirmando que era Raúl quien vendía.

Sobre su conversación con Marcelo, no sabe por qué dijo que él lo había amenazado con cortarle la cabeza, atribuyéndolo a confusión o a levantar falso testimonio.

Mencionó que por las noches se drogaba en el domicilio de Radal, en el día salía a comprar, se paraba en la salida. Al principio administraba el lugar, pero luego, entre 2022-2023 ya no lo hacía, indicando que tenían un "triunvirato" con la pareja, Victoria veía las platas, venía una vez al mes y pagaba al nochera y le pasaba dinero a él. Había una niña llamada Carla que administraba los estacionamientos y Nilton trabajaba en el taller mecánico y se preocupaba de la logística del estacionamiento de los autos.

A las preguntas del querellante, respondió que al día siguiente de que fue ultrajado con el destornillador, Victoria los llamó a todos y les dijo que nadie le podía pegar, dándole plazo a Raúl para irse de la casa. Esto se lo contó solo a la gente que estaba en la casa.

Precisó al Tribunal, a propósito del llamado que le hizo Nilton a almorzar el día de los hechos, que siempre almorzaban en la casa y cocinaban en la cocina de la casa.

SEXTO: Hechos preestablecidos. Que, consta del auto de apertura que los intervinientes no arribaron a convenciones probatorias.

SÉPTIMO: Medios de acreditación. Que con el objeto de desvirtuar y doblegar la presunción de inocencia de la que se encuentran provistos los acusados, la Fiscalía y querellante se valieron de ***PRUEBA TESTIMONIAL***, consistente en los dichos de **1.- Juan Marcelo Alvarado Flores** (declaración anticipada), **2.- Nicolás Ignacio Jara Ruiz**; **3.- Javiera Antonia Díaz Catrián**; **4.- Cristhian Felipe Muñoz Muñoz** ; **5.- Alexis Adrián Fernández Rojas**; **6.- Paula Andrea Acuña Campos**; y **7.- Gabriel Alejandro Farías Vergara**.

Rindió además ***PRUEBA PERICIAL*** de **Patricia Dina Negretti Castro**, perito forense del Servicio Médico Legal y Nieves **Alejandra Aguirre Orellana**, perito bioquímica de LACRIM Central.

Incorporó **PRUEBA DOCUMENTAL** signada en el auto de apertura con los números 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33.

Acompañó como **OTROS MEDIOS DE PRUEBA**, aquellos signados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 y 15.

Introdujo **EVIDENCIA MATERIAL** de los números 3, 4, 7, 8 y 9.

OCTAVO: Prueba de la Defensa. Por su parte, la Defensa incorporó **PRUEBA DOCUMENTAL** signada en el N°1 del auto de apertura.

NOVENO: Alegatos de término. Que, llegada la etapa de sostener las consideraciones de clausura, los intervinientes manifestaron lo siguiente:

El **Ministerio Público** sostuvo que el delito de secuestro generó un grave perjuicio en la víctima, quien sufrió quemaduras en el 24% de su cuerpo, catalogadas como gran quemado según expuso la perito Negretti. Argumentó que el nivel de acción contra la víctima superaba la conciencia de generar más dolor a las personas, configurando la agravante de ensañamiento. Sostuvo que la coautoría era relevante en este caso, pues una persona por sí sola difícilmente podía ejecutar un secuestro, existiendo una distribución de funciones, donde algunas personas tomaron a la víctima, otras le generaron lesiones en el lugar de cautiverio y otras lo liberaron. Respecto al tráfico de drogas, afirmó que se trataba de un fenómeno de tráfico barrial donde los sujetos actuaban con cierta permanencia en el tiempo, mediante la coacción a las personas, lo que permitía situarlos en la hipótesis del artículo 19 letra B de la Ley 20.000.

La **parte querellante** adhirió a lo expuesto por el Ministerio Público, agregando que se logró acreditar, más allá de toda duda razonable, la participación culpable de todos los acusados. Señaló que el relato de la víctima se mantuvo coherente y corroborado desde la primera denuncia hasta su declaración en sede judicial. Sostuvo que en el domicilio de calle Radal se traficaba droga y que Eduardo Cerda era el encargado del inmueble, constituyendo una sociedad de hecho o triunvirato que administraba la casa. Argumentó que los acusados aumentaron deliberadamente el mal del delito mediante un trato particularmente inhumano, expresado en lesiones y múltiples heridas cortantes, propinadas como verdadera tortura, lo que configuraba un sadismo que imprimía un plus injustificable al actuar.

A su turno, la **defensa de Eduardo Cerda** manifestó que existían serias dudas sobre las expresiones amenazantes atribuidas a su representado. Destacó que en la

denuncia preliminar no se mencionaba a Cerda, y que el testimonio de Carla Pineda señalaba que él se encontraba al interior de su habitación durante las agresiones. Argumentó que las supuestas amenazas ocurrieron cuando las agresiones ya habían cesado, representando dos problemas relevantes, el primero, un claro problema de congruencia y la imposibilidad de atribuirle participación en el secuestro porque éste ya se encontraba agotado. Cuestionó la calidad de administrador atribuida a su representado, mencionando el contrato de compraventa mediante el cual buscaba transferir los derechos sobre el inmueble, en enero de 2022, para desligarse del mismo. Finalmente, solicitó la absolución por ambas imputaciones conforme al artículo 340 del Código Procesal Penal.

Por su parte, la defensa de **Nilton Dorador y María Victoria Sepúlveda** sostuvo que el juicio se fundaba básicamente, principalmente y únicamente en el testimonio de una víctima que fue atacada y violentada. Argumentó que la víctima fue trasladada por dos personas en un vehículo gris con parachoques negros, ninguna de las cuales eran sus representados, y no quedó establecido cuánto tiempo después apareció Nilton en escena ni cuánto tiempo permaneció ahí. Respecto al delito de la ley 20.000, solicitó la recalificación al artículo 4 del mismo cuerpo legal, argumentando que no se hizo ningún levantamiento patrimonial y el mero peso de la sustancia no resultaba suficiente para determinar la figura aplicable, debiéndose atender a la forma y circunstancias de la comisión. Solicitó la absolución de sus representados por el delito de secuestro agravado, y en forma subsidiaria la reconducción al delito de lesiones graves.

Al **replicar**, el fiscal recalcó que el secuestro no podía compartimentarse, pues abarcaba desde que la persona perdía la posibilidad de decidir sobre su libertad hasta el momento en que era completamente liberado de sus captores. Invocó como doctrina al Profesor Juan Bustos, en relación con su postura del secuestro permanente. Sostuvo que lo que se cuestionaba era que la víctima no resultaba creíble, no obstante, argumentó que su relato era claro y se corroboró con la investigación. Respecto al tráfico, explicó que el microtráfico se creó como figura privilegiada para casos como el del vendedor que fue sorprendido una vez en una esquina, no siendo este el supuesto, dedicándose estas personas al tráfico de drogas durante varios años, mediando un control territorial.

En los mismos términos, el **querellante** expuso que, tanto fáctica como jurídicamente, la posesión del inmueble continuaba en la persona de Eduardo Cerda,

existiendo una suerte de administración de hecho. Reiteró que el secuestro creaba un estado antijurídico que permanecía en el tiempo hasta la liberación. Se opuso a la recalificación a microtráfico, destacando la cantidad y variedad de la droga encontrada, así como los elementos propios de la actividad, como balanzas y chaleco anticorte, señalando que no se trataba solamente de papelillos de marihuana, sino también de ketamina, droga sintética altamente peligrosa.

A su turno, **replicando**, la defensa de Eduardo Cerda señaló que existía disconformidad entre lo declarado por Carla Pineda y la víctima, generando con ello dudas que el Ministerio Público no pudo disipar pese a tener la carga de probar los hechos imputados. Argumentó que el secuestro tenía un inicio y un final cuando la víctima era liberada del lugar de cautiverio. Destacó que el Ministerio Público no desplegó ninguna actividad investigativa respecto al estacionamiento que existía en el inmueble, mostrando una visión de túnel. Respecto a las agravantes, planteó un evidente problema con el principio de non bis in ídem.

Finalmente, haciendo uso del derecho a **replicar**, la defensa de Nilton Dorador y María Victoria Sepúlveda insistió en que no se había probado fehacientemente que aquéllos hubiesen ejercido un control territorial. Argumentó que una llamada telefónica entre dos personas no superaba el estándar de convicción necesario.

Otorgada la palabra a cada uno de los acusados, **Eduardo Cerda** pidió disculpas a la víctima por no haber evitado que pasaran esas cosas, reconociendo que si tenía un grado de responsabilidad lo debía asumir. Por su parte, **Nilton Dorador** expresó que lo dicho en relación a la víctima no fue como se planteó, afirmando que su preocupación por él estuvo siempre, como se apreciaba en las conversaciones. Finalmente, **María Victoria Sepúlveda** manifestó que podía hacerse cargo del microtráfico, debido a la droga que mantenía en su poder, pero que las lesiones que se le hicieron a la víctima no se correspondían con el contexto que se señaló. Ofreció disculpas argumentando que su intención no fue causar daño.

NOVENO: Veredicto. Que, el Tribunal apreció la prueba rendida con libertad, que se pormenorizó precedentemente, velando no contradecir las reglas de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicamente afianzados, con lo cual concluyó que las probanzas rendidas e incorporadas por los acusadores resultaron suficientes para tener por acreditados, más allá de toda duda razonable, los hechos materia de la acusación, así como la participación de los acusados Nilton Israel Dorador Morales, María Victoria Sepúlveda Mac-Lean y Eduardo Antonio Cerda Olea,

como autores de los delitos consumados de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso cuarto del Código Penal, y tráfico ilícito de drogas, previsto y sancionado en el artículo 3 en relación al artículo 1 de la Ley 20.000. Tal decisión condujo al pronunciamiento de veredicto condenatorio a su respecto, por las razones que seguidamente se expondrán en los párrafos que siguen.

DÉCIMO: Debate sometido a conocimiento del Tribunal. Que, como primer antecedente se dirá que las imputaciones del Ministerio Público y querellante consistieron, a grandes rasgos, en aseverar que el día 7 de enero de 2023, aproximadamente a las 16:00 horas, en la comuna de Quinta Normal, Juan Marcelo Alvarado Flores fue abordado mientras cuidaba vehículos en calle Jujuy con Salvador Gutiérrez por dos individuos, identificados como Raúl apodado "Chino" y un sujeto venezolano apodado "Crown", quienes lo subieron por la fuerza a un vehículo Hyundai gris y lo trasladaron contra su voluntad hasta el inmueble ubicado en calle Radal N°1990. En dicho lugar, la víctima fue sometida a diversas agresiones que incluyeron, entre otras, amarrarlo de pies y manos, colgarlo, extraerle un diente con un alicate, apuñalarlo, cortarle la falange del dedo anular izquierdo y verterle agua hirviendo sobre su cuerpo en dos ocasiones, provocándole quemaduras en el 24% de su superficie corporal, que requirieron 38 días de hospitalización. Según la acusación, las agresiones se llevaron a cabo por instrucción del acusado Nilton Israel Dorador Morales, quien además lo apuñaló con un cuchillo en su glúteo derecho y ordenó a los otros individuos que continuaran con las agresiones. Por su parte, a María Victoria Sepúlveda Mac-Lean, pareja de Dorador Morales, se le atribuye haber vertido agua hirviendo sobre la víctima en dos ocasiones, mientras éste se encontraba en el suelo maniatado de pies y manos, en tanto, a Eduardo Antonio Cerda Olea, encargado del domicilio, se le imputa haber presenciado las agresiones sufridas por la víctima y haberlo amenazado indicándole que le cortaría la cabeza si se atrevía a realizar una denuncia por lo ocurrido. Además, la acusación sostiene que Cerda Olea facilitaba el inmueble a los imputados Dorador y Sepúlveda para distribuir droga en el sector, agregando que el 14 de marzo de 2023, en allanamientos realizados a los domicilios vinculados a los acusados, se encontraron -en Nueva Extremadura- alrededor de 701 gramos de cannabis sativa y 205 gramos de cocaína base, junto con implementos para su dosificación y comercialización en el departamento de Dorador Morales y Sepúlveda Mac-Lean. Adicionalmente, en poder de Sepúlveda Mac-Lean se

incautaron 2,38 gramos de ketamina, 1,92 gramos de cannabis sativa y \$45.000 en dinero en efectivo.

En contraposición a la tesis de los acusadores, como argumentación principal, las defensas sostuvieron que la prueba incorporada por los acusadores no fue suficiente para determinar la participación de sus representados en el delito de secuestro, poniendo en duda la credibilidad y valor de la declaración anticipada de la víctima. En el caso del acusado Eduardo Cerda Olea, su defensa esgrimió que éste no habría estado presente durante las agresiones, desconociendo la amenaza proferida a la víctima que se contempla en la acusación. Y en el caso de los acusados Nilton Dorador y María Victoria Sepúlveda, su defensa cuestionó la participación de estos en la privación inicial de libertad de la víctima, como las órdenes emanadas de Dorador para llevar a cabo el secuestro. En cuanto al delito de tráfico de drogas, la defensa de Cerda Olea cuestionó asimismo su participación, aseverando que su representado no tuvo vinculación con la venta de droga, indicando que tampoco poseía la calidad de administrador del inmueble, al haber suscrito un contrato de cesión de derechos de la propiedad de Radal 1990, en favor de los coimputados, argumentando además que en ese domicilio no se encontraron sustancias ilícitas ni elementos asociados al tráfico.

Si bien, la defensa de Dorador y Sepúlveda no cuestionó en principio la existencia y participación de sus representados en el delito de tráfico de drogas, solicitó su recalificación a la figura del artículo 4 de la Ley 20.000, razón por la que esta alegación será analizada en el acápite correspondiente.

UNDECIMO: Determinación de hechos no controvertidos. Que, durante la secuela del juicio se identificaron una serie de hechos objetivos y verificables que no fueron objeto de controversia.

1.- La existencia de las lesiones graves sufridas por Juan Marcelo Alvarado Flores, particularmente las quemaduras que afectaron el 24% de su cuerpo.

2.- La ocurrencia de un episodio de violencia contra la víctima en el inmueble ubicado en calle Radal N°1990, comuna de Quinta Normal.

3.- La posesión de sustancias ilícitas por parte de Dorador y Sepúlveda, halladas tanto en poder de la acusada Sepúlveda, como al interior del inmueble de Nueva Extremadura N°4966, departamento 401, comuna de Quinta Normal.

4.- La muerte de Raúl Antonio Silva Sepúlveda, circunstancia que además se desprende del certificado de defunción emanado del Servicio de Registro Civil e

Identificación, que da cuenta de su deceso el día 31 de agosto de 2023, a las 06:40 horas, estableciendo como causa de muerte "ASFIXIA POR AHORCAMIENTO".

DUODECIMO: Pruebas aportadas por los acusadores y valoración. Que, con el objeto de acreditar sus imputaciones, el Ministerio Público y la parte querellante se valieron de diversas probanzas que se analizarán a continuación.

Como primer antecedente, este Tribunal valoró el contenido de la declaración anticipada de **Juan Marcelo Alvarado Flores**, prestada el 28 de junio de 2023, ante el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, cuya grabación fue exhibida en juicio (contenida en otros medios de prueba N°12), cuyos datos de individualización constan formalmente en el documento signado con el N°30, correspondiente a un acta de audiencia de prueba anticipada, dirigida por el Magistrado del mismo Tribunal, don Eduardo Antonio Vásquez González. En dicha oportunidad, el declarante relató que trabajaba en calle Jujuy cuidando vehículos cerca de su ruco. Iba a comprar droga donde Nilton, el día 6 de enero lo llamaron para sacar unos escombros y le ofrecieron trabajo a cambio de \$20.000.-. Aceptó y empezó a trabajar haciendo aseo, preparando almuerzos y realizando otras tareas. Era eficiente y lo querían harto, estaba todo perfecto hasta que se perdió un banano con \$120.000.- de droga, entre marihuana, cocaína y pasta base.

Los llamaron a una reunión para que dijeran la verdad de quien había sacado la droga, mencionando que él no había sido. Les explicó que el sábado trabajaba cuidando vehículos cerca de su ruco. Aproximadamente a las 12:30-13:00 horas llegó "el chino" y "el venezolano" que trabajaban en el lugar, lo subieron a un vehículo, le agacharon la cabeza y le tiraron las manos hacia atrás. Luego, llegaron a la casa, lo bajaron del vehículo y lo metieron a una pieza. Durante el trayecto hablaban por teléfono avisándole a Nilton: "acá lo tenemos, ya llegó, lo trajimos". Al llegar al lugar, lo metieron a una pieza y el venezolano y el chino lo golpearon con palos, fierros y puños. Llamaron a Nilton quien les dijo: "empiecen a darle no más", y ahí lo empezaron a torturar, lo amarraron de manos y pies, lo colgaron de una puerta y continuaron agrediéndolo. Le dieron punzadas en el cuerpo, en la espalda, en el abdomen y en los testículos con un palo de pool. El "chino" le quemó las manos con un cigarrillo.

Mencionó que repetía "yo no fui, yo no fui" refiriéndose al robo de la droga, diciéndole estas personas que tenían que pegarle. En un momento, llegó don Nilton y le pegó un "puñalazo" en los cachetes del trasero con una cortaplumas, luego se fue y el chino con un fierro de bicicleta lo siguió agrediendo. Le soltaron un diente y luego

se lo sacaron, le cortaron el dedo con una cortaplumas, aproximadamente un centímetro y medio, y le hicieron una herida en la cabeza con el fierro. Les pidió por favor que le dieran agua y le trajeron agua con sal en una botella plástica. Estas dos personas le abrieron la boca a la fuerza y le metieron ron, casi ahogándolo. Le siguieron pegando y lo quemaron con un cigarro en las manos, le decían "no te gustó robar", y de tanto golpe que le daban decidió echarse la culpa para que lo dejaran retirarse tranquilo. En ese momento, vio que entró la señora de Nilton con un jarro de agua hirviendo que le arrojó suavemente por toda la espalda mientras estaba amarrado de pies y manos. Después, esta mujer lo golpeó con un fierro en la cabeza, diciéndole "no te gustó robarme, ahora estás pagando las consecuencias" y le arrojó otro jarro con agua hirviendo en la espalda.

Mencionó que las personas que estaban fuera de la habitación se reían, mientras otros decían "déjenlo, lo van a matar". Finalmente, Nilton dijo "cinco minutos más y lo sueltan, lo meten a la ducha y lo tiran para afuera". Se bañó con el peruano al que alojaba en su ruco y que fue quien realmente robó las cosas, después, este peruano lo llevó a su ruco. Antes de marcharse, cuando estaba sentado en un sillón afuera Eduardo lo amenazó diciéndole "*vos hablai cualquier cosa y te corto la cabeza*". El peruano lo llevó al ruco, no podía dormir del dolor, tampoco podía arrancar. El peruano se tomó unos copetes y logró liberarse del lugar a las 5-6 de la mañana, pero solo pudo avanzar unos 20 metros debido al dolor porque la grasa le colgaba. Divisó a un vecino que lo ayudó, trasladándolo al consultorio SAPU de Quinta Normal, con el 25% de su cuerpo quemado. Posteriormente, fue derivado al Hospital de Renca donde permaneció cuatro días recibiendo calmantes porque no tenían los medios para hacerle las curaciones. Debido a la gravedad de sus lesiones, especialmente en la espalda, fue trasladado a la Clínica INDISA donde estuvo hospitalizado durante 48 días. Allí le realizaron dos operaciones, incluyendo cirugía y trasplante en la espalda. También sufrió la fractura de un bíceps en la mano derecha.

Manifestó que quedó con secuelas físicas y psicológicas por el daño que le hicieron. Mucha gente pensaba que había muerto, ya que circularon rumores de que lo habían tirado a un caldero o a una parrilla en el estacionamiento, por lo que decidió acudir a Investigaciones para decir que estaba vivo.

Al ser **interrogado por el fiscal**, precisó que los hechos ocurrieron en el estacionamiento ubicado en Radal. Mencionó que a la pareja de Nilton le decían "la Vicky", asegurando que los tres acusados estaban en el inmueble el día de los hechos.

Respecto a las funciones que desempeñaron, ilustró que Nilton fue quien dio la orden para que lo secuestraran y torturaran y además lo apuñaló en los cachetes; Vicky le arrojó el agua caliente y Eduardo lo amenazó de cortarle la cabeza si hablaba.

Estimó haber estado siendo torturado por aproximadamente tres a cuatro horas, indicando que desde el momento de su secuestro hasta su liberación transcurrieron unas cinco horas y media.

Durante el **contrainterrogatorio**, confirmó a la defensa de Dorador y Sepúlveda, que quienes lo detuvieron y lo subieron al vehículo fueron Raúl "el chino" y "el Crown". No estaba Nilton ni Victoria en el vehículo durante el traslado, aclarando que Nilton fue quien mandó a buscarlo. Mencionó que el chino y Crown le propinaron golpes antes de llegar al domicilio, y que estas personas hablaban por altavoz durante el trayecto para que Nilton escuchara, quien dio la orden de la masacre.

Señaló que el robo de la droga ocurrió un día antes de que sufriera las lesiones. Al respecto, refirió que, al momento de conocerse el robo de la droga, Nilton inicialmente dijo: "Marcelo no tiene nada que ver acá" porque trabajaba en la cocina, después cambió de actitud. Aseguró que mientras trabajaba no recibió ningún llamado de Nilton ni de Vicky. Tampoco vio a Vicky cuando llegó al domicilio de Radal.

Respecto a las personas que lo colgaron, dijo que fue Raúl junto a otra persona, quedó suspendido a unos 50 centímetros del suelo. Negó haber sufrido lesiones de este tipo en ocasiones anteriores y confirmó haber realizado la denuncia 48 días después del incidente, aclarando que las personas que presenciaron los hechos, que se reían y comentaban no realizaron ninguna denuncia.

La declaración de don Juan Marcelo Alvarado Flores se estimó dotada de coherencia interna, al detallar con precisión y de forma clara, una serie de actos ocurridos en una fecha, horario y lugar determinado. De igual forma, su relato da cuenta de hechos que fueron acaeciendo de manera progresiva, comenzando por el ofrecimiento de trabajo que recibió por parte del encartado dorador, la pérdida de un banano con droga, la convocatoria a una reunión para indagar sobre el posible autor de este robo, a continuación el episodio de secuestro de que fue objeto seguido de torturas y agresiones, su posterior liberación y finalmente las diferentes atenciones médicas que recibió debido a las graves lesiones que se le causaron durante el período en que estuvo en cautiverio. Al respecto, no se evidenciaron contradicciones emanadas de su propia declaración que pusieran en entredicho todas estas circunstancias.

De especial relevancia se estimó por parte de este Tribunal, la consistencia y persistencia en la identificación de sus captores y agresores, diferenciando claramente a un sujeto apodado “el chino” y a otro apodado “crown” de nacionalidad venezolana, como las personas que ejecutaron inicialmente su secuestro por orden del acusado Nilton Dorador, y que lo trasladaron en contra de su voluntad al inmueble de Radal, para luego comenzar una seguidilla de agresiones que el mismo deponente calificó como “una masacre”. En igual sentido, identificó claramente a cada uno de los acusados y describió detalladamente su participación, atribuyéndole al acusado Dorador Morales no sólo haber ordenado su secuestro, sino también haberle propinado una puñalada en uno de sus glúteos y haber dirigido las torturas desde inicio a término, describiendo con detalle las diversas agresiones que recibió por parte de sus captores, quienes también obedecieron las órdenes impartidas por Dorador. En el caso de la acusada Sepúlveda Mac-Lean fue enfático en señalar que en dos ocasiones le vertió agua hirviendo sobre su espalda mientras estaba maniatado de manos y pies, agregando que el encartado Cerda Olea fue quien lo amenazó con cortar la cabeza si denunciaba. Sobre este punto, cobra relevancia la reproducción de frases de los agresores, por ejemplo, cuando Dorador entrega instrucciones telefónicas a los captores indicándoles “empiecen a darle no más”, o al referir “cinco minutos más y lo sueltan, lo meten a la ducha y lo tiran para afuera”, o cuando la acusada Sepúlveda le dijo: “no te gustó robarme, ahora estás pagando las consecuencias”. Respecto del acusado Cerda Olea reprodujo la amenaza final que éste le realizó luego de las agresiones. Lo anterior, ciertamente denota una experiencia vivenciada y que además resulta coherente con la secuencia de eventos posteriores a la tortura, como su regreso al ruco, los dolores y dificultad para moverse, el encuentro con un vecino que le brinda ayuda para trasladarlo al SAPU y las posteriores derivaciones y atenciones médicas que recibió, incluso en una clínica privada (Indisa) precisamente por la gravedad de las lesiones causadas.

Asimismo, la víctima entrega una explicación coherente para las torturas que vivenció, y que se relaciona con el entorno de tráfico de drogas que existía en el lugar de cautiverio, siendo él mismo comprador de sustancias en dicho inmueble. En este sentido, se estima consistente la asociación de todo este despliegue violento y agresivo con la pérdida de una cantidad de droga perteneciente a quienes, según su entender, daban las órdenes en el grupo, no evidenciándose en su declaración otras razones o motivaciones que pudiesen responder a los hechos de que da cuenta. Es

más, al inicio de su relato Alvarado Flores menciona que, hasta antes de su secuestro todo estaba bien, que incluso lo querían, develando una buena relación con el grupo que permanecía en el inmueble de Radal, quienes lo contrataron informalmente para cumplir labores de aseo y cocina. El hecho de culparse para que lo dejaran retirarse del lugar, es coherente con la reunión del día anterior en la que se da aviso de la pérdida de la droga, así como con el propósito de los agresores de obtener una confesión sobre la autoría del robo, utilizando para ello mecanismos violentos y vejatorios como los que la víctima describió.

En este contexto, en mérito de lo que se viene razonando, es posible concluir que la declaración de Alvarado Flores, examinado su contenido desde una perspectiva interna, aparece coherente y detallada. Además, fue otorgada con estricto apego a todas las formalidades contempladas en la ley, resguardándose adecuadamente el ejercicio de los derechos procesales de las defensas, en especial, el de confrontación, tal como queda de manifiesto en el contrainterrogatorio efectuado por la defensa de Dorador y Sepúlveda en el contexto de la misma declaración anticipada, razón por la que se desestima la alegación interpuesta en clausuras por este interviniente, argumentando que la forma como se introdujo la declaración de la víctima le habría impedido realizarle consultas y confrontarlo con sus propios dichos.

A continuación, corresponde analizar si los antecedentes y elementos proporcionados por Alvarado Flores en su declaración anticipada encuentran correspondencia y respaldo en las restantes pruebas incorporadas al juicio.

En primer término, la pericia médico legal realizada y expuesta en juicio por la doctora **Patricia Negretti Castro**, profesional del Servicio Médico Legal, constituyó una prueba fundamental de corroboración del relato entregado por la víctima, toda vez que la descripción de las lesiones constatadas por la perito evidenció una correspondencia precisa con los hechos relatados, lo que confirmó que las lesiones que mantenía Alvarado Flores eran compatibles con su relato.

En primer lugar, resulta importante destacar la diferencia de tiempo que medio entre la práctica del examen médico legal, el 15 de marzo de 2023, y la ocurrencia de los hechos, el día 7 de enero de 2023, lo que fue explicado razonablemente por Alvarado, al ilustrar que permaneció hospitalizado a causa de las lesiones alrededor de 48 días, antecedente que se corrobora mediante la documental consistente en la Epicrisis de fecha 17 de febrero de 2023, firmada por el médico Luis Santos Tobías y J. Villegas, ambos de la Clínica Indisa, que confirma la fecha de alta médica tras su

prolongada hospitalización. Este documento fue examinado por la perito Negretti Castro, quien consignó en su informe pericial que la ficha clínica N°1795855 de la Clínica Indisa, desde el 11 de enero, confirmaba el diagnóstico de gran quemado, con 24,5% de superficie corporal afectada y que el paciente fue dado de alta el día 17 de febrero del año 2023, coincidiendo exactamente con la fecha del documento de traslado enfermería firmado por la enfermera Pamela Arias de la misma institución. Asimismo, expuso que la Ficha Clínica del Hospital Félix Bulnes Cerda consignaba la atención inicial entre el 8 y el 10 de enero del 2023, confirmando que el paciente consultó después de 12 horas de haber recibido una quemadura con agua hirviendo, lo que confirma la demora en recibir atención médica.

Ahora bien, en lo que dice relación con el examen físico, se advirtió una manifiesta correspondencia con las lesiones mencionadas por Alvarado Flores. En efecto, la perito constató una cicatriz horizontal en el cuero cabelludo interparietal de aproximadamente 3 centímetros, lo que es compatible con el golpe que recibió en la cabeza cuando fue agredido con un fierro. Adicionalmente se constató una cicatriz en el pulpejo del dedo anular izquierdo, encontrándose este dedo acortado, con una cicatriz vertical de 1 centímetro en la falange distal, lesión que corrobora su declaración respecto a que le cortaron el dedo con una cortaplumas. La doctora Negretti mencionó un aumento de volumen en el dorso de la mano izquierda, refiriendo el ofendido a la perito que aquello ocurrió cuando fue golpeado con un fierro. A continuación, la perito señaló que la radiografía tomada el 22 de marzo de 2023 en el Servicio Médico Legal confirmó una fractura del quinto metatarsiano, con acortamiento del hueso, así como una fractura en vías de consolidación con desplazamiento de segmento óseo. De otro lado, las cicatrices lineales horizontales observadas en ambas muñecas, fueron atribuidas por la perito a la acción de colgamiento y amarras, tal como relató la víctima, en cuanto a que lo amarraron de manos y pies para luego colgarlo, quedando en suspensión por aproximadamente 30 minutos.

Particular relevancia tuvo la constatación de una extensa cicatriz rosada atribuible a quemaduras y a injertos, que se extendía por todo el dorso y ambos hombros, además hacia la zona lumbar hasta la cintura, comprometiendo la cara anterior del hombro izquierdo y la región clavicular y supraclavicular derecha, compatible con la acción de haber sido quemado en dos oportunidades con agua hirviendo, acción que Alvarado Flores atribuyó a la encartada María Victoria Sepúlveda. Tal circunstancia se consigna -tal como refirió Negretti- además en la ficha

cínica del hospital Félix Bulnes, al señalar que el paciente consultó después de 12 horas de haber recibido una quemadura con agua hirviendo, presentando restos de ropa adherida a la piel de la espalda, catalogando su estado como gran quemado, con compromiso del 24,5% de la superficie corporal, con quemaduras ABA y ABB.

De igual forma, la perito constató una cicatriz de 1 por 1,5 centímetros en la cara del tercio inferior del antebrazo derecho atribuible a la quemadura de un cigarro, lo que coincide con el relato de Alvarado en cuanto afirmó que uno de los agresores le quemó la mano con un cigarrillo.

Uno de los documentos que tuvo a la vista la perito fue la ficha clínica de la Clínica Indisa, que daba cuenta de lesiones en el hombro derecho, que incluían un desgarró del músculo bíceps del hombro derecho con rotura del tendón largo de este mismo músculo, rotura completa de los tendones supraespinoso e infraespinoso derechos, tendinosis de los tendones del rotador menor y del subescapular derechos, y un esguince acromioclavicular derecho, lesiones todas compatibles con las agresiones derivadas de haber estado colgado, en suspensión, y los golpes relatados por la víctima.

Consultada sobre el nivel de dolor que pudieron provocar las lesiones causadas, la perito aclaró que la intensidad de dolor variaba según el tipo de lesión, en este sentido, las quemaduras, que fueron catalogadas de superficiales y otras más profundas, y que requirieron aseos quirúrgicos e injertos, se asociaban a un dolor prolongado por muchos días y que fue intensificándose; los golpes con objetos contundentes podían causar dolor que duraba aproximadamente entre uno a dos días, disminuyendo en intensidad; la extracción sin anestesia del diente debió provocar un dolor más intenso pero de menor duración; el corte del pulpejo del dedo anular izquierdo genera un dolor intenso que se prolonga por dos a tres días y la fractura en el dorso de la mano izquierda debió causar un dolor muy intenso que disminuyó con el tiempo pero que se exacerbaba con el movimiento. Lo anterior es compatible con los dichos de la víctima, en cuanto manifestó que, tras su liberación, no podía dormir de dolor y que cuando logró escapar solo pudo avanzar unos 20 metros a causa del dolor y de la grasa que le colgaba.

Respecto a la potencial mortalidad de las lesiones, la perito explicó que en el caso del gran quemado, definido como aquel con 20% o más de superficie corporal comprometida, tenía una estimación de mortalidad cercana al 80% sin atención médica. En el caso de Alvarado Flores, con 24,5% de superficie corporal afectada, las

quemaduras representaban un efectivo riesgo vital sin atención oportuna, lo que corrobora la gravedad de las lesiones y los hechos relatados por la víctima.

En sus conclusiones, la perito Negretti estableció que las lesiones eran explicables por la acción de un agente térmico, de pronóstico médico legal grave, que sanaron luego de múltiples tratamientos quirúrgicos especializados en 45 a 60 días con igual tiempo de incapacidad. También consignó que las lesiones hubiesen resultado mortales de no mediar socorros médicos oportunos y eficaces.

La información entregada por la perito se vio reforzada mediante la introducción del documento N°4, correspondiente a la epicrisis de fecha 17 de febrero del año 2023 del Hospital Félix Bulnes, relativa a la víctima Juan Marcelo Alvarado Flores, que detalla con precisión la evolución clínica y las estadísticas de egreso hospitalario, confirmando la gravedad de las lesiones sufridas, el prolongado período de internación y los diversos tratamientos requeridos para su recuperación. Asimismo, el documento N°3, consistente en el formulario de vigilancia de microbiología para prevención y control de IAAS (Infecciones Asociadas a la Atención en Salud) de la unidad de prevención y control de IAAS del Hospital Félix Bulnes, da cuenta del seguimiento especializado que requirió la víctima debido a la complejidad de sus lesiones, particularmente las quemaduras, que por su extensión y profundidad representaban un riesgo significativo de infecciones nosocomiales.

Finalmente, se dirá que la médico forense dispó de manera satisfactoria las dudas que pretendió instalar la defensa durante su contrainterrogatorio, en cuanto a cuestionar que en los documentos médicos tenidos a la vista por la facultativa, en especial las fichas clínicas emanadas del hospital Félix Bulnes y clínica Indisa, no se hacía alusión a la totalidad de las lesiones observadas, respondiendo Negretti que aquello se explicaba porque los servicios de salud priorizaban conservar la vida del paciente y la funcionalidad, no siendo el foco de interés la descripción exhaustiva de todas las lesiones, agregando que para ello existía el Servicio Médico Legal.

En consonancia con lo que se viene razonando, el peritaje médico legal se estimó un elemento probatorio suficiente de corroboración de la declaración anticipada de Alvarado Flores, contribuyendo a dotar de veracidad su relato.

En el mismo sentido, los testimonios de los funcionarios policiales Nicolás Jara Ruiz, Alexis Fernández Rojas, Cristhian Muñoz Muñoz, Paula Acuña Campos y Gabriel Farías Vergara, confirmaron sus asertos, al introducir en juicio elementos

fundamentales de su denuncia inicial, además de detallar pormenorizadamente cada una de las diligencias investigativas llevadas a cabo.

En primer término, el Subcomisario de la Policía de Investigaciones **Nicolás Jara Ruiz**, quien cumplió labores de oficial de caso, explicó que la presente investigación se gestó cuando la víctima, identificada como Marcelo Alvarado Flores, realizó una denuncia ante la Brigada de Investigación Criminal de Quinta Normal, derivándose luego el procedimiento a la Brigada Antisecuestro Metropolitana, el 21 de febrero de 2023. Ilustró que la denuncia se recibió cerca de las 19:30-20:00 horas, y aproximadamente a las 21:00 horas del mismo día, sin esperar la comunicación con la fiscalía, activaron el carro de turno, tomaron contacto con la víctima y lo trasladaron para que prestara declaración, iniciándose así las diligencias de manera inmediata.

Al respecto, le correspondió recabar de forma personal la denuncia, otorgada 41 días después de los hechos, cuando fue dado de alta de la clínica. En dicha oportunidad, manifestó haber sido secuestrado por un grupo de narcotraficantes el 7 de enero de 2023, en la intersección de las calles Jujuy con Salvador Gutiérrez, comuna de Quinta Normal.

Como antecedentes previos al hecho relatado, la víctima ilustró que estaba en situación de calle desde el año 2019, residiendo en un ruco en Jujuy con Salvador Gutiérrez, en la comuna de Quinta Normal, lugar donde cuidaba y estacionaba vehículos. Sobre su historial de vida, expuso que el año 2013 se trasladó desde Antofagasta hasta Santiago para trabajar con su hermana Angélica Alvarado en un lavado de vehículos y en el año 2019 comenzó a consumir pasta base, lo que le generó problemas en su vida, perdió su trabajo, quedó en situación de calle, siendo conocido en el sector como Marcelo. Indicó que en una oportunidad llegó hasta el inmueble de Radal 1990, donde fue atendido por Nilton junto a su pareja Vicky, Eduardo, Raúl apodado “el Chino” y también estaba un venezolano apodado “Crown”. Como era consumidor, Nilton y ese grupo le vendieron droga. El 2 de enero de 2023, mientras transitaba cerca del domicilio, Eduardo lo llamó para decirle que Nilton quería conversar con él, ingresó a la propiedad y Nilton le ofreció trabajo informal de aseo y cocina para las personas que residían en el inmueble, comenzando a cumplir esas labores el mismo día. Expuso que, dentro de la dinámica que observó en el lugar, pudo conocer cómo funcionaba la venta de droga, siendo Vicky la encargada de hacer la recaudación del dinero y de la droga no vendida. Con respecto a los hechos que motivaron su denuncia, expuso que el día 6 de enero de 2023, en horas de la tarde,

Nilton reunió a las personas de la casa señalando que se había perdido un paquete de droga y que debía aparecer. En esa oportunidad les dijo a él y al peruano que ellos no tenían nada que ver porque se dedicaban a labores de aseo y cocina. Posteriormente, el día 7 de enero de 2023, a las 16:00 horas, mientras estaba en Jujuy con Salvador Gutiérrez, llegó un vehículo Hyundai gris, modelo Accent o Elantra, con la característica del parachoques trasero negro, del cual descendió Raúl apodado “el Chino” y el venezolano “Crown”, quienes lo obligaron a subir al automóvil y le dijeron que debía responder por la droga perdida. Lo trasladaron hasta Radal 1990, ingresó a la segunda habitación del sector oriente de la propiedad, donde fue increpado por Raúl y Crown por la pérdida del paquete. Estas personas comenzaron a agredirlo con elementos contundentes como un palo de madera de pool y un manubrio de bicicleta metálico, golpeándolo en distintas partes de su cuerpo, lo amarraron de manos y pies, incluso lo colgaron por el picaporte de la puerta de la habitación, quedando en suspensión ya que era antigua y alta. Indicó que el chino Raúl, con un alicate, le extrajo una de sus piezas dentales y, pasado un tiempo llegó Nilton y le preguntó por el robo del paquete de droga, a lo que respondió que no tenía nada que ver en ese asunto, Nilton procedió a apuñalarlo en uno de sus glúteos con un cuchillo y les dijo a Raúl y Crown que hicieran lo que fuera necesario para que él hablara sobre ese paquete perdido. Lo agredieron nuevamente con elementos contundentes y después pidió agua y le trajeron agua con sal que no pudo consumir, obligándolo después a beber ron. Posteriormente llegó Vicky, la pareja de Nilton, quien lo increpó y también le preguntó por la pérdida del paquete de droga, reiterándoles que no tenía nada que ver con eso. Acto seguido, Vicky le vertió agua hirviendo en la zona de su espalda, manifestando que este dolor casi lo hace perder la consciencia, luego, la mujer tomó el manubrio de la bicicleta y le pegó en la cabeza, preguntándole nuevamente por la droga, procediendo nuevamente a verterle agua hirviendo desde un hervidor de color blanco que trajo y que tenía agua recién hervida, retirándose ésta después del lugar. Señaló que Raúl le propinó un corte en la primera falange del dedo anular de la mano izquierda, agregando que estas agresiones fueron presenciadas por las personas que estaban en el lugar. En un momento, Joan, el peruano, habló con estas personas y les dijo que detuvieran las agresiones debido al estado en el que se encontraba, instruyéndole Raúl a Joan que lo trasladaran a su ruco y se mantuviera en custodia para que no pudiese salir, todo lo cual ocurrió entre las 20:00-20:30 horas de ese día 7 de enero. La víctima también mencionó que antes de salir de radal, Eduardo, a quien

identificó como propietario del inmueble, le dijo que no denunciara nada porque si lo hacía le cortarían la cabeza. Finalmente, señaló que salió custodiado por el peruano hasta su ruco, y para poder liberarse, le entregó parte de su dinero a Joan para que comprara alcohol y salir en busca de ayuda. En la mañana del día 8 de enero de 2023 pidió ayuda a un vecino del sector que hizo las coordinaciones para su traslado al CESFAM Janequeo donde lo estabilizaron, luego fue trasladado al hospital Félix Bulnes, por la gravedad de las lesiones fue derivado a la clínica Indisa para tratar sus quemaduras, siendo dado de alta el 17 de febrero de 2023.

En cuanto al contenido de la denuncia introducida a través del testimonio del Subcomisario Jara, se advierten coincidencias sustanciales con lo expuesto por la víctima en su declaración anticipada, evidenciándose una clara consistencia en cuanto a la forma, modalidad, contexto temporal y espacial del secuestro descrito, así como en la atribución de acciones lesivas específicas y amenazas recibidas por parte de los acusados, además de detallar la participación de quienes cumplieron funciones en su captura inicial y durante el periodo de cautiverio, relatando además las particularidades de su posterior liberación y atenciones médicas recibidas. Si bien, pueden advertirse diferencias menores en relación a su declaración judicial, lo cierto es que aquellas se relacionan más bien con detalles específicos que no alteran la narración medular de los hechos, como tampoco lo esencial de su testimonio.

A continuación, el oficial Jara Ruiz detalló una serie de diligencias llevadas a cabo por el equipo investigativo dispuesto al efecto, y que derivaron precisamente de la denuncia interpuesta por Alvarado Flores. Una de ellas fue la fijación fotográfica de las lesiones, lo que se realizó el 21 de febrero de 2023. Resulta relevante destacar que a través de la exhibición de fotografías contenidas en otros medios de prueba N°1, el testigo Jara, no solo fue detallando las múltiples lesiones fijadas a la víctima, sino que también realizó una asociación con los dichos de éste, reforzando con ello la consistencia de su relato. En efecto, destacó en las imágenes diversas marcas de quemaduras en la espalda, cuello, hombros, brazos, pierna izquierda (desde el muslo a tobillo), que atribuyó a la acción del agua caliente derramada sobre su cuerpo; un eritema en zona perital de la cabeza con enrojecimiento; una lesión en la primera falange del dedo anular ya cicatrizada; otra quemadura en su pierna derecha que el testigo describió como un punto o una cicatriz por perforación de elemento cortante o quemadura por cigarro; una cicatriz en el sector del glúteo que atribuyó a la acción de un elemento corto punzante y que resultó compatible con la lesión provocada por

Nilton; la falta de un diente incisivo central superior, compatible con la extracción realizada por Raúl; abrasiones en las muñecas y pies de la víctima que pudieron generarse por la sujeción con cables de cobre cuando fue amarrado de pies y manos, y posteriormente colgado.

El testigo destacó que pese al tiempo transcurrido desde los hechos (45 días), muchas de las lesiones seguían siendo visibles, lo que demostraba la gravedad de las mismas, en especial las quemaduras en su cuerpo y las marcas en las muñecas, lo que daba cuenta de la presión ejercida al efectuarlas.

Otra de las diligencias realizadas a partir de la información entregada por la víctima, fue la identificación del automóvil utilizado para la comisión del secuestro, obtenida, según dio cuenta Jara Ruiz, de una búsqueda realizada en la plataforma SOSAFE, pudiendo visualizar dos publicaciones de usuarios anónimos. La primera, que consignaba la observación de un vehículo en las inmediaciones del lugar de cautiverio con similares características a las entregadas por la víctima, con tres personas encapuchadas con gorras y mascarillas en su interior, y que al ver la presencia del usuario no descendieron del vehículo. Un segundo usuario de la plataforma publicó una fotografía del vehículo con la placa patente visible, lo que les permitió determinar que mantenía un encargo vigente por robo a raíz de una denuncia interpuesta por un señor identificado como Héctor Luna, lo que además se condice con el documento N°5, correspondiente al informe de vigencia número CERB-202302-302 de fecha 13 de febrero del año 2023, emitido por Carabineros de Chile. Al exhibirle esta fotografía del vehículo a Alvarado Flores, éste lo reconoció como el automóvil en el que fue transportado por sus secuestradores. En relación con lo mismo, el Tribunal pudo observar a través de la exhibición efectuada al testigo de las fotografías contenidas en otros medios de prueba N°2, la información obtenida desde la plataforma SOSAFE y la imagen del vehículo Hyundai Elantra de color gris, patente HPFJ-65, que mantenía parachoque trasero negro. La información relativa al vehículo Hyundai Elantra de color gris, patente HPFJ-65, apareció corroborada mediante el documento signado con el N°33, consistente en el certificado de inscripción y anotaciones vigentes emitido por el Registro Civil e Identificación, que confirma las características del automóvil y además contiene la anotación del encargo único nacional por robo, tal como mencionó el Subcomisario Jara Ruiz. Este antecedente documental refuerza la veracidad del relato de la víctima en cuanto a las características del vehículo en que fue trasladado contra su voluntad.

A continuación, en base a la información entregada por la víctima, expuso Jara que indagaron dos inmuebles de interés, para lo cual tuvieron a la vista 4 informes facilitados por el fiscal de la causa, cuya información se extrajo de la plataforma “Denuncia Seguro”, contenida en los documentos signados con los números 31 y 32, que daba cuenta que en los domicilios de Radal 1990 y de Nueva Extremadura Nilton Dorador, apodado “el guatón Nilton” se dedicaba al tráfico de drogas. Jara agregó que también tuvieron acceso a un informe de Carabineros, que daba cuenta de la detención de Eduardo Cea Olea, en el año 2020, indicando que en su domicilio de Radal 1990 se encontró una motocicleta robada. Explicó Jara que estos antecedentes les permitieron realizar la primera asociación con estas personas. A continuación, de la búsqueda de antecedentes en la base BRAIN, pudieron identificar que Cerda Olea estaba asociado al domicilio de Radal 1990, de Quinta Normal, ya que un informe de la Brigada Criminal de Maipú, en el año 2020 ubicó en dicho domicilio un vehículo con encargo por robo, oportunidad en que se le tomó declaración como testigo al acusado Cerda, quien declaró ser propietario del lugar. Asimismo, en la base de datos identificaron y asociaron a María Victoria Sepúlveda el domicilio de Nueva Extremadura N°4699, departamento 401, la fue contactada por funcionarios policiales para ubicar a Nilton Dorador, quien mantenía una orden de detención por infracción a la ley de armas, señalando la mujer que era su ex pareja y que desde el año 2019 ya no residía con ellos, desconociendo su actual paradero.

Otra diligencia relatada por Jara Ruiz fue la concurrencia a la intersección de las calles Jujuy con Salvador Gutiérrez, estableciendo que era un sitio abierto, no pudiendo identificar cámaras de seguridad que registraran el principio de ejecución del secuestro atendido el tiempo transcurrido. No obstante, empadronaron a un testigo identificado como Alexander Fuentes, quien residía frente al ruco de la víctima y que declaró que en horas de la mañana del día 8 de enero de 2023, junto a Carlos Castro lo trasladaron al CESFAM Janequeo luego de observar las quemaduras en su cuerpo.

Cabe destacar que la introducción de los dichos de Alexander Fuentes, a través de la declaración del funcionario Jara, se estimó coherente con lo relatado por la víctima en cuanto a la forma como logró escapar y buscar ayuda luego de haber sufrido las agresiones.

En el contexto de las diligencias realizadas en las inmediaciones del sitio del suceso, se exhibieron al testigo diversas imágenes contenidas en otros medios de prueba N°4, obtenidas con el objeto de fijar fotográficamente y georreferenciar el lugar

donde fue inicialmente abordada la víctima, como también el inmueble de Radal 1990 donde permaneció cautiva. A este respecto, se incorporaron capturas de pantalla obtenidas de Google Maps que dieron cuenta de la ubicación de esos mismos lugares, ilustrando el deponente que entre ambas ubicaciones existía una distancia de tres o cuatro cuadras cortas. En las fotografías se observó la intersección de Jujuy con Salvador Gutiérrez desde distintas orientaciones, destacándose en una de las imágenes la ubicación del ruco de la víctima, que se encontraba desarmado por el tiempo transcurrido, visualizándose algunas especies propias de este tipo de residencia. En otras fotografías se observó el portón de acceso del inmueble de Radal 1990 y la puerta de acceso de madera de la misma propiedad.

En consonancia con la fijación fotográfica del lugar, se exhibió al testigo Jara el documento N°9, correspondiente a los planos del inmueble ubicado en Radal N°1990, contenido también en otros medios de prueba N°11. Dicha planimetría permitió al Tribunal dimensionar con precisión las características específicas del inmueble donde la víctima permaneció en cautiverio, visualizando la distribución de las habitaciones, los accesos, el patio y el sector de estacionamientos. El Subcomisario Jara Ruiz, al analizar estos planos durante su declaración, pudo señalar con exactitud la ubicación de la habitación donde Alvarado Flores fue agredido y torturado, así como los diversos ambientes del inmueble mencionados en su relato, confirmando la compatibilidad entre la distribución real del lugar y la descripción proporcionada por la víctima, lo que refuerza nuevamente la credibilidad y consistencia del testimonio de Alvarado Flores. Sobre este punto, y ante las preguntas de precisión formuladas por el Tribunal, el testigo detalló que la propiedad contaba con tres dormitorios, dos baños, living comedor, cocina y una bodega. Preciso que el pasillo también era utilizado como bodega para acumular objetos. En cuanto al espacio exterior, explicó que al salir de la puerta principal había un patio que era una extensión de terreno proyectado hasta el límite perimetral, formando una L con el lugar de los estacionamientos, donde se encontraban numerosos vehículos.

A continuación, el oficial a cargo de la investigación señaló que el día 28 de febrero de 2023, en conjunto con los oficiales Héctor Balboa y Alexis Fernández se dirigieron a Radal 1990, comuna de Quinta Normal, para efectuar una vigilancia discreta y conocer el movimiento de personas del domicilio. Entre las 13:20 y 16:00 que permanecieron en el lugar, observaron que a las 14:52 horas llegó en una camioneta Dodge negra la imputada Victoria Sepúlveda, quien hizo ingreso al

inmueble. También observaron a Nilton Dorador. A las 15:20 horas vieron salir a Eduardo Cerda Olea, quien regresó al inmueble luego de algunos minutos. Asimismo, observaron gran cantidad de personas que concurrían golpeando la puerta, ingresando y retirándose a los pocos minutos, lo que asociaron a la venta de drogas descrita por la víctima, visualizando también a distintas personas que ingresaban y salían en más de una oportunidad, a quienes vincularon a trabajadores o residentes que no pudieron ser individualizados, no obstante fueron fijados fotográficamente. En ese contexto, se exhibieron al testigo fotografías contenidas en otros medios de prueba N°5, verificándose en las imágenes todas las circunstancias expuestas por el oficial Jara, indicando además que en una de las fotografías (N°12) se apreciaba un sujeto que llegó en vehículo, ingresó al inmueble y salió, dejando su vehículo estacionado, por lo que concluyeron que podía ser un arrendatario de estacionamiento, al igual que otras personas que entraban y salían con vehículos del inmueble. En consonancia con lo anterior, se exhibieron imágenes contenidas en otros medios de prueba N°3, en las que además se observó una captura de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Quinta Normal que registró el vehículo en el que llegó la imputada Sepúlveda, marca Dodge patente DPWV-35 de color negro.

Adicionalmente, Jara Ruiz mencionó que luego de practicadas estas diligencias, efectuaron la exhibición o reconocimiento por parte de la víctima de Kardex fotográficos, sindicando en primer lugar a Nilton Dorador, como la persona que lideraba este grupo, ordenó su secuestro y lo apuñaló en un glúteo, luego, a la pareja de éste Victoria Sepúlveda, apodada "Vicky" que era quien recaudaba el dinero y la droga y que además lo quemó con agua caliente, finalmente reconoció a Cerda Olea, a quien identificaba como Eduardo y propietario de Radal 1990, atribuyéndole la acción de haberlo amenazado con cortarle la cabeza si denunciaba los hechos.

Explicó que, con los antecedentes recabados hasta ese momento obtuvieron autorización judicial para diligenciar las órdenes de detención, así como la práctica de entrada y registro a los domicilios de Radal y Nueva Extremadura, materializando estas diligencias el 14 de marzo de 2023, en horas de la tarde. Expuso que el equipo de la Brigada antisequestro apostada en Nueva Extremadura N°4699, departamento 401, comuna de Quinta Normal, observó a una mujer con características físicas similares a las de la imputada Sepúlveda Mac-Lean, constatando que se trataba de la misma persona, procediendo a su detención en virtud de la orden vigente por el delito de secuestro. A la revisión de sus vestimentas, en un banano, la imputada portaba

bolsas con droga. Entraron al inmueble en cuyo interior estaba Nilton Dorador, procediendo a su detención por el mismo delito, además de infracción a la ley de armas en virtud de una orden de detención que estaba pendiente. En el domicilio encontraron balanzas digitales, bolsas dosificadoras, chaleco anti corte, 701 gramos de marihuana y 205 gramos de cocaína distribuida en distintos contenedores, por lo que les atribuyeron además el delito flagrante de la ley 20.000.

Sostuvo que, en forma paralela ingresaron al domicilio de Radal 1990, en cuyo interior estaba el acusado Cerda Olea, materializando su detención por delito de secuestro. Realizaron una revisión del lugar, percatándose que en el living comedor había un hervidor blanco, en tanto, otro hervidor blanco se encontraba en la cocina, todo lo cual coincidía con el relato de la víctima de haber sido quemado con agua hirviendo utilizando para ello dos hervidores blancos. Además diversos peritos trabajaron en el lugar efectuando labores de fijación fotográfica y planimetría del lugar de cautiverio, levantando desde el dormitorio donde la víctima sufrió las agresiones una hoja metálica, una bolsa de genero morada y un trozo de frazada de polar, dando todas las evidencias positivo para la presencia de sangre.

Una de la diligencias que se estimó especialmente relevante, fue la toma de declaración de una de las personas que se encontraba al interior del inmueble de Radal, identificada por el testigo Jara como Carla Pineda Berríos, y que reunía características similares a las señaladas por la víctima como una de las trabajadoras del lugar. Si bien, el deponente Jara aclaró que fue su colega Alexis Fernández quien recabó dicho relato, aclaró que en su condición de oficial de caso se enteró del contenido de esa declaración. Consultada sobre los hechos, Pineda manifestó que trabajaba hace 4 meses en Radal administrando los estacionamientos que se arrendaban. Expuso la declarante que un día vio que en un auto salieron Raúl apodado "el Chino" junto a un venezolano apodado "Crosti" (Crown), desde Radal, a buscar a Marcelo. Dijo que pudo escuchar a la víctima gritar fuertemente "me quema", "me quema", lo que le causó gran estrés y temor, por lo que salió hacia el patio. Mencionó que Raúl el Chino y Crosti estaban con la víctima y también vio llegar a Nilton con Vicky quienes se dirigieron hacia la pieza donde estaba la víctima retenida, asegurando que ese momento Eduardo Cerda Olea también estaba en el lugar. Agregó que "el Chino" Raúl, dos semanas antes de la entrada y registro se había retirado de la casa y estaba residiendo en Plaza lo Boza.

Consultado por la defensa de Cerda Olea, Jara precisó que Carla Pineda señaló que mientras todo esto pasaba, Eduardo, el dueño estaba en su pieza, dentro de la casa, refiriendo también que cuando ya estaba oscuro, a eso de las 20:00 horas, soltaron a Marcelo y lo dejaron atrás de la propiedad y ella junto a un hombre de nacionalidad peruana, que también trabajaba para ellos, le hicieron una cama con unos cojines de unos sillones para que descansara un poco. Agregó que le pasó plata a ese peruano para que le comprara paracetamol, ibuprofeno y agua, y a eso de las 22:00 horas, el mismo peruano se llevó a Marcelo al ruco, y, al volver al día siguiente, comentó que Marcelo había pedido ayuda a un vecino para que lo llevara al hospital porque ya no aguantaba más.

El oficial Jara Ruiz indicó que Carla Pineda, luego de su declaración, mantuvo contacto con los oficiales y posteriormente compartió por WhatsApp una captura de pantalla de un perfil de Facebook de Raúl “el chino”, que registraba como nombre de usuario “Raúl Silva Silva”. Mediante búsquedas dieron con su perfil y al revisar las publicaciones identificaron una fotografía en la que salía junto a un joven menor bajo la reseña "hijo de tigre", entonces, buscaron el perfil de “Raúl Silva Castañeda” en la base de datos del Servicio de Registro Civil y correspondía a un sujeto que era hijo de Raúl Silva Sepúlveda, cuya imagen era coincidente con la fotografía del perfil de Raúl Silva Silva, logrando por ende su identificación. Seguidamente, Jara expuso que con este antecedente, realizaron los Kardex correspondientes y la víctima lo reconoció como la persona más agresiva del secuestro. Agregó el Subcomisario que no fue posible diligenciar la orden de detención a su respecto ya que se enteraron que había fallecido el 30 de abril de 2023, a causa de asfixia por ahorcamiento.

Dentro de las diligencias relatadas por Jara Ruiz, aquella consistente en la extracción y análisis de información de los dispositivos móviles incautados fue, sin lugar a dudas, la que posibilitó determinar de manera directa múltiples antecedentes de contexto en cuanto a las dinámicas que mantenían los acusados relativas a la venta de drogas y el uso de la violencia en el ejercicio de esta actividad, siendo útil además la diligencia para reafirmar el relato de la víctima, la participación directa de los acusados y el conocimiento que éstos mantenían de los hechos investigados.

En este sentido, explicó Jara que los teléfonos periciados se obtuvieron durante la entrada y registro a los domicilio, verificándose que a Cerda Olea se le incautó un móvil marca Huawei de color azul, modelo I6, IMEI N°35905509593261, de la compañía WOM, asociado al NUE 6845540, a Nilton Dorador uno Samsung Galaxy

A11 negro y uno Motorola modelo One Fusion azul, asociados al NUE N°6845544, y a María Victoria Sepúlveda uno de la marca Huawei, sin modelo, carcasa rosada con diseño de mandala, asociado al NUE 6845528, especies que el deponente reconoció a través de la exhibición de la evidencia material N°7, 8 y 9, ilustrando que fueron periciados a través de la plataforma XAMN que permite realizar extracción de información sin alteración y revisar conversaciones, correos y contactos de los celulares. En concordancia con esta explicación, se le exhibió otros medios de prueba N°15, correspondiente a un disco duro marca Toshiba con la información del vaciamiento de tales dispositivos móviles.

En lo que respecta a la primera extracción del celular Samsung SM A11FS, asociado a Nilton Dorador, en la sección de fotografías, pudieron observar la imagen de Nilton y el nombre de cuenta "Israel Morales.d44@gmail.com", que correspondía a Nilton Israel Dorador Morales. Dentro de sus contactos mantenía a "Patrona WhatsApp" y "Patrona 2" (asociados a María Victoria Sepúlveda), "Edu Antonio" (Eduardo Cerda), "Raúl Silva Nuevo" (Raúl "el Chino"), "Princesa Chucky" (María Victoria Sepúlveda) y "Rastaman" (asociado al sujeto que culpó a la víctima del robo).

Dentro de los múltiples mensajes con interés criminalístico, se destacaron los siguientes:

1.- Mensajes de audio que permitieron confirmar la relación de pareja entre Nilton Dorador y María Victoria Sepúlveda, correspondiente a audios del 18 de febrero de 2023. El testigo explicó que Nilton enviaba dos audios a una mujer llamada Susana. En el primero (23:33:34) le indica su número de teléfono. En el segundo (23:49:51) menciona que "conversará con su señora Victoria para juntarse y organizar un panorama". En un audio del 3 de marzo de 2023 (01:13:39), Nilton le dice a Raúl que "va la guatona para su casa", posiblemente refiriéndose a María Victoria. En otros mensajes Nilton se refiere a ella como "mi amor", como se desprende de la conversación que la pareja sostiene el 5 de marzo de 2023, a las 01:28:26 AM y el 13 de marzo de 2023, a las 18:19:11. En otro mensaje de 6 de marzo de 2023, a las 14:27:28, Nilton dice a Raúl que "se quede por allá", que "Eduardo estaba en la casa y no quería hacerse problema", y agrega que "la patrona es la jefa y le genera problemas con ella". Lo anterior confirma los dichos de la víctima, en cuanto a que Nilton Dorador y María Victoria Sepúlveda Mac-Lean mantenían un vínculo de pareja antes de los hechos como de forma posterior.

2.- Mensajes que confirman la existencia de actividades de tráfico de droga, organización y funciones que cumplían los acusados. En un mensaje de 13 de marzo, a las 18:18:17, Victoria le pregunta a Nilton: "oye, sacaste o vendiste falopa cuando yo no estaba". A continuación, a las 18:19:18, Victoria dice: "me faltan dos, eran cinco, vendí dos y tengo una". Jara Ruiz mencionó que estos mensajes daban cuenta de que Victoria era quien controlaba la existencia de droga. Lo mismo se desprende del mensaje enviado a las 19:22:58, del día 6 de marzo, en el que Victoria dice a Nilton que "no hay del 2" y le solicita ayuda para reponerla, lo que refuerza su función de control sobre la droga, además de confirmar el relato de la víctima en cuanto a que era ella la encargada de hacer la recaudación del dinero generado por la droga que se vendía y de aquella droga que no era vendida durante la jornada.

En un mensaje enviado el 6 de marzo, a las 16:05:16: Nilton Dorador le dice a Eduardo Cerda que "él y Victoria deben manejar sus dineros, \$500.000 cada uno" y que "no quiere que nadie le maneje sus cuentas", lo que evidencia su posición de autoridad. En otro mensaje del mismo día a las 16:14:18, Eduardo Cerda le dice a Nilton que "sabe que él es el mariscal junto a su señora, respondiendo Nilton a las 14:27:28 que "la patrona es la jefa", lo que según el testigo confirma la posición jerárquica de Nilton y de Victoria dentro del grupo y es asimismo compatible con el relato de la víctima, en cuanto aseguró que fue Nilton Dorador quien dispuso su secuestro y posterior tortura, cumpliendo María Victoria Sepúlveda un rol preponderante en estas acciones.

En otro mensaje del 9 de marzo de 2023, a las 16:09:31, Eduardo Cerda le menciona a Nilton que en su calidad de administrador está con estrés y que se tomará vacaciones, lo que Jara interpretó como una manifestación de la existencia de un trabajo en conjunto. En un mensaje de 6 marzo de 2023, a las 16:05:57, Nilton le pregunta a Eduardo si "le incomoda que Raúl se vaya a bañar y a lavar ropa" en la propiedad, lo que demuestra que Eduardo Cerda tenía control sobre el inmueble donde operaban, y que también es coincidente con lo reportado por la víctima, en cuanto a sindicar a Eduardo como propietario del inmueble de Radal 1990, donde se realizaban las ventas de droga. En otra cadena de mensajes es posible constatar la relación de confianza existente entre Eduardo Cerda y Nilton Dorador, como es el caso del audio de 8 de marzo de 2023, a las 20:07:44, en el que Eduardo le dice a Nilton que "fue con él al BBVA a retirar dinero", lo que según el testigo Jara evidencia la relación de confianza, en la que uno guarda al otro documentos de identidad y

además realizan retiros de dinero en conjunto. El 6 de marzo de 2023, a las 16:04:38, Nilton le dice a Eduardo que "él no tiene que poner dinero para nada", lo que según el testigo Jara es otra manifestación de la vinculación y nivel de confianza entre ellos. En un mensaje de 6 de marzo de 2023, a las 16:05:16, Nilton le dice a Eduardo "que sea precavido", lo que según Jara demostraba que compartían información sensible sobre sus actividades. Estos mensajes, sumados a aquellos ya mencionados, donde Eduardo se refiere a Nilton como "el mariscal" y donde se presenta como "administrador", confirman según el testigo Jara la existencia de una relación de confianza y una estructura jerárquica clara entre los acusados, compatible con lo declarado por la víctima sobre la participación de Eduardo Cerda en los hechos y su rol como propietario del inmueble donde se desarrollaban las actividades de tráfico y donde además ocurrió el secuestro.

Ahora bien, se destacaron una serie de mensajes entre Nilton Dorador y Raúl "el Chino" (fallecido), que dan cuenta de la comercialización de droga. El 3 de marzo de 2023, a las 00:54:03, Nilton le dice a Raúl "que avise si hará una transferencia o pagará el dinero en efectivo", lo que según Jara podría estar relacionado con transacciones de droga. El 5 de marzo de 2023, a las 02:07:42, Raúl dice "al llegar con la plata de marihuana", lo que según el testigo Jara significaba que iba trasladando el dinero con la venta de marihuana". El 8 de marzo de 2023, a las 19:47:28, Raúl informa a Nilton que estaba "en la plaza con el piloto de la marihuana", que según el testigo Jara podía corresponder a un contacto para distribuir esa sustancia.

En otra cadena de mensajes del día 3 de marzo, que se detallarán a continuación, se reafirma la actividad de venta de droga liderada por Nilton Dorador. El 3 de marzo de 2023, a las 17:14:07, un contacto individualizado como "Víctor" le dice a Nilton que "está a 8 de 1", que según el testigo Jara podría aludir a una cantidad de droga que le pudiese quedar. A las 17:29:57, Nilton pregunta a Víctor "si estaba en cero del uno"; a las 17:30:51, Víctor responde "del 2 igual". A las 19:24:13, Nilton le pide a Víctor que "le envíe las bolsitas porque él está trabajando", que según el testigo Jara aludiría a sustancias ilícitas. A las 19:26:21: Nilton le dice a Víctor que "mejor no le lleve las bolsas porque había mucha gente afuera". A las 19:29:52, Nilton le pide a Víctor que "vea lo que le pidió del 1", que según el testigo, puede referirse a algún tipo de sustancia ilícita. En mensajes de fecha 4 de marzo de 2023, a las 16:23:11 se remiten imágenes de plantas con las características de marihuana del

contacto "Dios es amor", quien comenta "tenemos buena cosecha", mencionando Jara que podía corresponder a un proveedor de droga de Nilton.

3.- Mensajes que evidencian el uso de fuerza y violencia en el modo de operar de los acusados. El 3 de marzo de 2023, a las 01:17:36 AM, Nilton le dice a Raúl que al "viejo que le había hecho la mariconada, lo mandará a buscar, lo llevará al sitio y él mismo le iba a pegar", lo que según el testigo Jara da cuenta de la planificación de ejercer violencia para recuperar dinero adeudado a su persona. El 3 de marzo de 2023, a las 16:17:04, Nilton se contacta con un sujeto de nombre Jaime Neira por una deuda, lo que según el testigo Jara demuestra la intención o planificación para obtener el dinero que se le adeuda, evidenciando un patrón en cuanto a su actuar. El 6 de marzo de 2023, a las 14:28:09, Raúl dice a Nilton que "en la calle se sabe todo, quien habla", destacando que "él apretó al viejo, que con las otras personas lo atrincaron", lo que el testigo Jara interpretó como una agresión para obtención de información. El 6 de marzo de 2023, a las 14:31:41, Nilton le dice a Raúl que "ayer apretó a un weón", y que "si llega alguien al sitio, él mismo le pega y se soluciona todo", lo que según Jara Ruiz refuerza el patrón de usar la violencia como método de resolución de problemas. El 6 de marzo de 2023, a las 14:47:14, Raúl dice que "irá a muerte con los tres" y utiliza la expresión "se rompe o se raja", que según el testigo Jara demuestra no tener temor ante situaciones de violencia. Posteriormente, en un mensaje del 6 de marzo de 2023 a las 14:31:43, Raúl habla de alguien que "sabía lo que pasó" y menciona que "ha tratado de dar con la dirección" y que "antes de que pase algo se lo pitea primero", lo que el testigo Jara interpretó como un posible atentado contra una persona. Esta cadena de mensajes, según concluyó Jara, mostraban que el grupo ejercía la violencia como elemento clave para el control territorial, valiéndose de intimidación para resolver conflictos, estableciendo un patrón claro de actuar mediante amenazas y agresiones.

4.- Mensajes que hacen alusión al secuestro, al nombre de Marcelo y que develan el conocimiento que los acusados tenían acerca de lo sucedido. El 5 de marzo de 2023, a las 01:28:26 AM, Nilton envía un audio a Victoria en el que le dice que "está terminando", que "pudo obtener información" y sabía que "Marcelo estaba trabajando en la feria, en el sector donde estacionaba autos". Agrega que "hay que dejarlo y no ir a pegarle porque qué ganas le van a quedar", lo que el testigo Jara interpretó como que el daño a la víctima ya había sido suficiente, y Nilton dice que "no le interesa si Marcelo está con la policía, le da lo mismo". El mismo día, a las 01:30:29,

Nilton informa a Victoria que "Raúl ya tomó ala, el chico también", refiriéndose según el testigo a que se fueron del lugar por el delito de secuestro que cometieron. El 6 de marzo de 2023, a las 14:28:58, Nilton dice a Raúl que "por el asunto de Marcelo lo deje ahí", que "no le importa". El mismo día, a las 14:54:44, Nilton le dice a Raúl que "converse para obtener información", ya que "se había preguntado si le habían pegado y torturado", agregando que Nilton se estaría juntando con la hermana de la víctima para pasarle plata, que se llama Angélica. El testigo mencionó que podría ser coincidencia, pero la víctima tenía una hermana en la Región Metropolitana, en Quinta Normal, de nombre Angélica. Estos mensajes evidencian claramente que Nilton estaba al tanto de lo que le había ocurrido a Marcelo, refiriéndose expresamente a las agresiones y torturas, demostrando una actitud desafiante al señalar que no le interesaba si Marcelo estaba con la policía. El 8 de marzo de 2023, a las 19:31:04, Nilton advierte a Raúl que "está todo tranquilo pero que hay presencia policial en alguno de los domicilios que frecuenta", lo que revela preocupación ante posibles investigaciones. Finalmente, el 13 de marzo de 2023, a las 20:36:32 y 20:36:47, Victoria envía a Nilton una imagen de calavera humana con el comentario "con los cabros comentaron que era el cadáver de uno de los torturados en el reality show 2023", lo que el testigo Jara describió como un comentario burlesco de la situación vivida por la víctima, respondiendo Nilton a las 20:37:05 con una imagen de una cara de risa. Los anteriores mensajes resultan relevantes, toda vez que no solo demuestran que los acusados tenían perfecto conocimiento de lo ocurrido, sino que además evidencian falta de remordimiento y un total desprecio por la vida y dignidad humana, haciendo burla de las agresiones y torturas provocadas a Marcelo Alvarado.

Finalmente, el deponente Jara se refirió a la segunda extracción de teléfonos, correspondiente al teléfono Motorola XT1021 de Nilton Dorador, que según explicó no tenía la aplicación WhatsApp instalada y mantenía los mismos contactos que en el Samsung Galaxy A11, porque ambos compartían la misma cuenta de Google. Basado en su experiencia investigativa, expuso que uno de los teléfonos podría estar siendo utilizado como servidor para compartir conexión a internet, mientras que el segundo se conectaba a esta red WiFi para establecer comunicaciones, práctica utilizada generalmente como medida de seguridad para evitar la interceptación de comunicaciones, lo que sugería un nivel de sofisticación y precaución en la operación del grupo. En cuanto a la tercera extracción, correspondiente al teléfono Huawei MRD L21 I6 de Eduardo Cerda (NUE 6845540), se encontraron dos contactos

particularmente relevantes: "Vicky WhatsApp", que corresponde a María Victoria Sepúlveda, y "Tyson", utilizado por Nilton Dorador. Estos contactos confirman la vinculación directa entre los tres imputados. El testigo Jara señaló que del teléfono de Victoria Sepúlveda (Huawei con carcasa rosada, NUE 6845528) no fue posible obtener información debido a limitaciones técnicas del programa utilizado.

El Tribunal valoró la declaración del Subcomisario Jara como una prueba idónea y relevante para la acreditación de los hechos materia de imputación y participación de los acusados, al proporcionar un análisis acabado y exhaustivo de las diligencias investigativas llevadas a cabo por el equipo de la Brigada Anti Secuestro que lideró, además de las pericias que se realizaron en este contexto. Su relato permitió corroborar la declaración de la víctima, en cuanto a la identificación de los tres imputados mediante reconocimiento fotográfico, la constatación médica de las graves lesiones sufridas que permanecían visibles 45 días después de los hechos, la verificación de la existencia del vehículo descrito por la víctima, y la localización precisa del lugar de cautiverio donde se encontraron elementos de interés criminalístico. En el mismo sentido, la diligencia de extracción y análisis de información de los dispositivos móviles incautados a los acusados, permitió acceder a conversaciones posteriores a los hechos donde los propios imputados hicieron referencia explícita a la víctima, a las agresiones y torturas que le fueron inferidas.

En efecto, el Tribunal comparte y hace suyas cada una de las conclusiones expuestas por Jara Ruiz, por cuanto obtuvieron confirmación en la contundente prueba incorporada al juicio durante su declaración, siendo además coincidentes con el relato de la víctima. Así, se estableció que entre los tres acusados existía una organización jerarquizada dedicada al tráfico de drogas, liderada por Nilton Dorador y María Victoria Sepúlveda, con Eduardo Cerda como administrador del inmueble donde operaban; que este grupo utilizaba sistemáticamente la violencia como herramienta de control, intimidación y resolución de conflictos; que los tres imputados tenían conocimiento y participación en el secuestro y torturas infligidas a Marcelo Alvarado; que las lesiones causadas a la víctima resultaron de tal gravedad que debió permanecer hospitalizado durante 38 días; y de no haber conseguido la víctima liberarse mediante su propia astucia, probablemente habría fallecido sin atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

Desde ya, se dirá que el Tribunal no comparte los cuestionamientos efectuados por las defensas, en relación a la interpretación y apreciación que el oficial otorgó a

determinados mensajes extraídos en el contexto de la diligencia de vaciamiento de información de los celulares de los acusados, por cuanto sus explicaciones se basaron en la vasta experiencia en investigaciones de este tipo y no contradijeron las circunstancias que resultaron acreditadas. Al respecto, y como primer punto, la defensa de Cerda cuestionó que Jara interpretara el audio del 9 de marzo de 2023 donde Cerda Olea se refiere a sí mismo como "administrador" y menciona estar estresado, por lo que tomaría vacaciones, como una posible alusión a actividades ilícitas, agregando Jara, luego de la intervención de la defensa, que también podía referirse al arriendo de estacionamientos, apreciación que en ningún caso merma el valor probatorio de su declaración ya que, según se acreditó existía inequívocamente una vinculación del acusado con los demás imputados, que bien pudo coexistir para efectos del desarrollo de ambas actividades, lo que no excluye que el acusado Cerda hubiese desempeñado labores también en la actividad ilícita a la que se refirió Jara.

Asimismo, ante la pregunta de la defensa de Dorador y Sepúlveda sobre el origen del dinero entregado por la víctima a Joan con el objeto de conseguir su liberación, Jara explicó que, si bien la víctima no especificó de dónde lo obtuvo después de que le quitaran su billetera, posiblemente mantenía alguna reserva escondida en su ruco, explicación que resulta plausible considerando las máximas de la experiencia aplicables a personas en situación de calle. Finalmente, precisó a la misma defensa que en las conversaciones extraídas de los celulares, Nilton nunca utilizó específicamente el término "secuestro", circunstancia que no desvirtúa la contundencia de las referencias a la víctima y a las agresiones que le fueron inferidas, las que inequívocamente aluden a los hechos materia de la acusación, según quedó demostrado.

A continuación, el deponente **Alexis Fernández Rojas**, Inspector de la PDI, corroboró lo declarado por el Subcomisario Jara y por la víctima. Expuso que el día 21 de febrero de 2023, como parte integrante de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales tomó conocimiento de la denuncia interpuesta por Juan Marcelo Alvarado Flores, trasladándose hasta donde se encontraba la víctima para llevarla a su unidad con el objeto de que prestara declaración. Indicó haber presenciado la declaración de la víctima, incorporando sus dichos en similares términos a los expuestos por el oficial de caso Nicolás Jara. Al respecto, reprodujo antecedentes de contexto de su declaración, por ejemplo, que era oriundo de Antofagasta y llegó a Santiago para trabajar con su hermana; que debido al consumo de pasta base cayó

en situación de calle; que vivía en la intersección de Jujuy con Salvador Gutiérrez, lugar donde cuidaba autos; que en octubre de 2022 se enteró por comentarios de la gente que en Radal 1990 se vendía droga, empezando a adquirir pasta base en dicho domicilio.

El testigo introdujo asimismo información en relación a hechos previos al secuestro relatado por la víctima, en cuanto a que el propietario del inmueble de Radal, Eduardo Cea Olea le comentó que Nilton quería hablar con él; del ofrecimiento de trabajo que le hizo Nilton y que consistía en realizar lo que denominó “pololitos” de labores domésticas como limpieza y cocina; y la circunstancia de haber constatado la víctima que en dicho inmueble operaba un negocio de venta de drogas. También se refirió a la reunión del día 6 de enero de 2023, en la que se expuso la pérdida de un paquete de droga. En relación al secuestro ocurrido el 7 de enero, el testigo ratificó que la víctima sindicó a Raúl y "Crow" como las personas que lo obligaron a subir a un vehículo Hyundai gris con parachoques trasero negro, trasladándolo forzosamente hasta el inmueble de Radal, como lo referido a las agresiones relatadas por Alvarado Flores, consistentes en diversos golpes con un palo de pool y un manubrio de bicicleta, suspensión del picaporte de la puerta, extracción de un diente con un alicate, corte en la primera falange del dedo anular izquierdo, quemaduras con agua hirviendo en dos ocasiones y golpes en la cabeza. En cuanto a las acciones específicas realizadas por cada imputado, su testimonio fue acorde a lo referido por la víctima, confirmando que Nilton Dorador llegó al lugar con posterioridad y ordenó tomar todas las medidas necesarias para dar con el paradero de la droga perdida; que María Victoria Sepúlveda también ingresó posteriormente, preguntó por la droga, y fue quien le arrojó agua hirviendo en dos ocasiones, y finalmente, que Eduardo Cerda estaba presente en el inmueble durante los hechos, en su pieza y luego lo amenazó diciéndole que si hacía una denuncia le cortaría la cabeza.

En los mismos términos expuestos por Jara Ruiz, el deponente Fernández reiteró la diligencia que permitió la identificación del vehículo utilizado en el secuestro, refiriéndose al uso de la aplicación SOSAFE para tal efecto, confirmando que la víctima reconoció el automóvil al exhibírsele la fotografía obtenida desde una publicación.

En lo que respecta a la diligencia de entrada y registro a los inmuebles de Radal y Nueva Extremadura, el testigo ratificó lo expuesto por Jara, destacando su participación directa en la detención de la acusada María Victoria Sepúlveda, quien

mantenía en su poder 6 bolsas de una sustancia sintética de color rosa con un pesaje de 2,38 gramos, -que resultó ser ketamina- y dos bolsas de una sustancia de color verde al interior de un banano, agregando que, al ingresar al inmueble correspondiente al departamento N°401 detuvieron al acusado Nilton Dorador, incautando desde el interior del domicilio 701 gramos de cannabis sativa, 205 gramos de cocaína base y dinero en efectivo de baja denominación.

De especial relevancia se estimó lo señalado por el testigo en relación a la declaración prestada por Carla Pineda, presenciándola directamente. Al respecto, mencionó que Pineda aseguró haber observado a una persona de sexo masculino bajar de un vehículo de color gris de cuatro puertas, ingresando a Marcelo a una habitación, escuchando que empezaron a golpearlo, al parecer con palos y fierros. Agregó que Raúl salió de la habitación al cabo de unos minutos para buscar un cuchillo, volviendo a entrar nuevamente a la habitación. Pineda señaló que Marcelo pidió agua y le trajeron agua con sal, mencionando que después entró Nilton a la habitación, quien permaneció por unos minutos y luego salió. Indicó que vio entrar a la habitación a María Victoria, que luego salió y regresó con agua en un hervidor, instante en el que escuchó gritos desgarradores de Marcelo diciendo “me quemo”, tapándose Pineda los oídos ante tal situación y retirándose hacia el patio, momento en que observó que a Raúl pelaba unos cables, pensando ella que era para meterle corriente a Marcelo. Agregó que después abrió la puerta y observó a Marcelo amarrado de pie y manos boca abajo. De acuerdo con el relato de Pineda, a las 20:00 horas liberaron a la víctima y ella junto con el ciudadano peruano le hicieron una cama con sillones y le prestaron una frazada, y al otro día el ciudadano peruano indicó que Marcelo se había ido y que Raúl lo había golpeado con unos palos en la espalda por este descuido, lo que motivó que este ciudadano peruano se retirara del domicilio. Agregó Pineda que después supo que Raúl estaba viviendo en la calle, en la comuna de Lo Espejo.

Destacó el testigo Fernández, que Carla Pineda mencionó que al entrar al domicilio después de que toda esta situación había ocurrido, encontró sangre en el suelo, en el lugar donde estuvo colgado Marcelo, y que Raúl le indicó al peruano que limpiara con un paño que luego botaron.

En lo que respecta a la comercialización de droga en el domicilio de Rada 1990, el testigo Fernández manifestó que pudo observar de manera presencial la entrega de droga a diversas personas que acudían al domicilio, describiendo como dinámica

que éstas golpeaban la puerta, entraban y salían, recalcando que cuando la luz del patio estaba encendida significaba que se estaba comercializando droga, información que también fue proporcionada por la víctima.

De acuerdo a lo que se viene señalando, el testimonio del Inspector Fernández se estimó dotado de credibilidad ya que, no solo corroboró los asertos de Jara y de la víctima, sino que además aportó información detallada acerca de la forma en que ocurrió el secuestro y agresiones a la víctima, confirmando la participación de los tres acusados en este hecho como en la organización dedicada al tráfico de drogas, dando cuenta además que, en este contexto, los encartados ejercían una particular dinámica de violencia frente a conflictos relacionados con la misma actividad delictiva.

A continuación, el testimonio de la Inspectora **Paula Acuña Campos** corroboró lo expuesto por el Subcomisario Jara Ruiz, en cuanto mencionó haber formado parte del grupo investigativo que concurrió a las cercanías del domicilio ubicado en Nueva Extremadura 4966, departamento 401, en Quinta Normal, con el objeto de realizar labores de vigilancia en los alrededores. En ese contexto, participó en el control de identidad realizado a la imputada María Victoria Sepúlveda cuando ésta ingresaba al condominio. Al efectuarle una revisión de las vestimentas la acusada portaba en un banano seis bolsitas dosificadoras con sustancia en polvo color rosado, dos bolsitas con sustancia vegetal color verde y \$45.000 en efectivo, incautándosele además un celular marca Huawei con una carcasa rosada con mandalas. Expuso que al ingresar al departamento, con la llave facilitada por la propia imputada, encontraron en su interior al imputado Nilton Dorador Morales, a quien detuvieron por la orden relacionada con el secuestro y otra relativa a la infracción a la ley de armas, además del delito flagrante de infracción a la Ley 20.000.

La Inspectora describió con detalle el departamento, mencionando que constaba de tres dormitorios, un baño, cocina y comedor. En el pasillo al costado oriente, utilizado como acopio de diferentes especies como carritos de feria y ropa, encontraron un chaleco anticorte color negro. En la mesa del living hallaron una balanza digital blanca y dos celulares pertenecientes al imputado Nilton. En un closet ubicado en el pasillo, justo afuera del baño, encontraron un pote de vidrio transparente con tapa amarilla que contenía una sustancia en polvo color blanca, que dio positivo para cocaína en la prueba de campo realizada. En los dos dormitorios pequeños no encontraron especies relevantes. En el dormitorio principal o matrimonial, hallaron en el closet dos frascos de vidrio con sustancias vegetales color verde similares a

cannabis y en una caja metálica negra abierta encontraron \$60.000.- en efectivo, distribuidos en billetes de baja denominación. Al costado de la cama, en una caja de cartón, había una bolsa de nylon color negra que contenía diversas bolsas dosificadoras de distintos tamaños. En el suelo, junto a la cama, hallaron un bolso negro que contenía tres frascos (dos de vidrio y uno de plástico) con sustancia vegetal verde, una bolsa de nylon blanca con más bolsas dosificadoras y una gramera color gris.

La declaración de la funcionaria Acuña tuvo correlato en las fotografías que le fueron exhibidas, contenidas en otros medios de prueba N°6, en las que se observó cada uno de los hallazgos y descripciones relatadas por la testigo. En efecto, en dichas fotografías se visualizó la ubicación exacta del inmueble, el acceso al departamento y cada una de las habitaciones descritas, además de las diversas especies incautadas en los mismo lugares referidos por la deponente.

Durante el contrainterrogatorio, la inspectora precisó que las balanzas digitales fueron decomisadas porque, en el contexto de la evidencia hallada, se determinó que eran utilizadas para dosificación de droga, junto con las numerosas bolsas plásticas vacías de tipo dosificadoras.

En consonancia con lo expuesto por la Inspectora Paula Acuña Campos, prestó declaración el Subcomisario **Gabriel Farías Vergara**, señalando haber participado de las vigilancias discretas al domicilio de Nueva Extremadura, de la diligencia de entrada y registro a dicho inmueble, así como de las detenciones de los acusados Nilton Dorador y María Victoria Sepúlveda. En ese contexto, y coincidiendo con la funcionaria Acuña en cuanto a la descripción de los hallazgos incautados a la encartada Sepúlveda y al interior del domicilio de Nueva Extremadura, detalló con precisión las características de las sustancias, pesos y cadenas de custodias que se les asignaron.

En cuanto a las especies incautadas a María Victoria Sepúlveda Mac-Lean, indicó que las bolsas de nylon con sustancia vegetal color verde mantenían características propias de cannabis sativa, dando positivo a esa sustancia luego de practicarse la prueba de campo respectiva, con un pesaje de 1,97 gramos, en tanto, la sustancia en polvo de color rosado, con un peso aproximado de 2 gramos, no pudo ser dubitada.

Respecto a las sustancias incautadas en el domicilio de Nueva Extremadura, indicó que el frasco con sustancia en polvo de color blanco que fue encontrado en un mueble cerca del baño mantenía características propias de cocaína, arrojando

positivo a la presencia de clorhidrato de cocaína, con un peso de 205,67 gramos, rotulándose la evidencia bajo cadena de custodia N°6845534. Los tres contenedores con sustancia vegetal de color verde, con características propias de cannabis sativa, ubicados dentro de un bolso en la habitación principal, al costado de la cama, arrojaron coloración positiva para dicha sustancia, con pesos de 48, 57 y 18 gramos respectivamente, los que fueron rotulados bajo cadena de custodia N°6845529.

Otro testimonio que se estimó de suyo relevante para efectos probatorios, fue la declaración del Subcomisario **Cristhian Muñoz Muñoz**, toda vez que proporcionó corroboración a los aspectos centrales de la declaración de la víctima Marcelo Alvarado Flores y además confirmó el resultado de las diligencias relatadas por el Subcomisario Jara Ruiz.

En primer término, ilustró que participó en la diligencia de entrada y registro al domicilio de calle Radal N°1990 en Quinta Normal, el 15 de marzo de 2023, dando cuenta de la detención del acusado Eduardo Cerda Olea al interior de dicho inmueble, incautándosele desde sus vestimentas un teléfono celular marca Huawei, modelo I9, misma especie referida por el oficial Jara en el contexto de la diligencia de extracción de información de los aparatos móviles.

De especial importancia resultó el antecedente aportado por el deponente, en cuanto al hallazgo en dicho domicilio de dos hervidores de color blanco, uno marca Sindelen ubicado en el living y otro marca Recco en la cocina, elementos que resultan concordantes con lo declarado por Alvarado Flores, quien manifestó específicamente que Victoria Sepúlveda le vertió agua hirviendo sobre su espalda en dos oportunidades, haciendo mención a un hervidor de color blanco, y además confirma lo detallado por el oficial de caso Jara Ruiz, en cuanto al hallazgo de estas especies en el domicilio.

Unido a lo anterior, la exhibición de ambos hervidores durante el juicio, contenidos en la prueba material N°3 y N°4, asociado a las cadenas de custodia 6845541 y 6845542, respectivamente, refuerza la consistencia de lo declarado por los testigos antes referidos.

El testigo Muñoz también dio cuenta de las particularidades del inmueble de Radal, mencionando que al interior se emplazaba una cocina y habitaciones destinadas para tal efecto.

En el mismo sentido, la declaración de la **Inspectora Javiera Díaz Catrián**, permitió verificar y validar los reconocimientos realizados por la víctima, respecto de

cuatro de sus agresores, atribuyéndoles acciones específicas desplegadas durante el periodo en que permaneció en cautiverio. En efecto, la funcionaria Díaz detalló con precisión todo el proceso de reconocimiento fotográfico llevado a cabo el 2 de marzo de 2023, ilustrando que se le exhibieron a Alvarado Flores ocho Kárdex fotográficos, divididos en tres pares, donde en cada par se incluía un sospechoso presente y ausente. De esta forma, en el set N°2, fotografía 9, la víctima reconoció a Nilton Israel Dorador Morales, a quien identificó como el líder del grupo y quien ordenó su secuestro, además de provocarle una lesión en uno de sus glúteos. En el siguiente Kárdex, la víctima reconoció en la fotografía N°4 del set N°2 a María Verónica Sepúlveda Mac-Lean, a quien identificó como la pareja de Nilton, encargada de recaudar y administrar el dinero de la venta de drogas, y como la persona que le provocó quemaduras con agua caliente. Finalmente, en el último Kárdex, la víctima reconoció en la fotografía N°5 del set N°2 a Raúl Antonio Silva Sepúlveda, identificándolo como quien lo subió a un vehículo junto a un venezolano, lo amarró de manos y pies, le propinó diversos golpes, le extrajo un diente con un alicate y le cortó la falange de uno de sus dedos. También mencionó que cuando solicitó agua, esta persona le dio agua con sal.

En este sentido, la declaración de la inspectora permitió dotar de credibilidad el relato de la víctima, por cuanto incorporó detalles acerca de las acciones específicas realizadas por cada uno de los acusados, lo que permite concluir que la incriminación y sindicación efectuada por Alvarado Flores fue sostenida a lo largo de las diversas instancias en que expuso lo ocurrido en el contexto del secuestro de que fue objeto.

A continuación, el Tribunal valoró la prueba documental incorporada por el Ministerio Público, relativa a la droga incautada en poder de los acusados en el domicilio correspondiente a Nueva Extremadura, la que a su vez permitió confirmar la naturaleza, características y peso de tales sustancias, en consonancia con lo expuesto por los funcionarios policiales Gabriel Farías Vergara y Paula Acuña Campos. En primer lugar, el acta de recepción de droga N°1635-2023, de fecha 15 de marzo de 2023, emanada del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, da cuenta de la recepción de la cadena de custodia 6845534, con un peso bruto de 205,5 gramos. El mismo documento registra la recepción de la cadena de custodia 6845529 con una cantidad recibida de 0,9 gramos de polvo rosado. Complementa lo anterior, el oficio reservado N°5037-2023, de fecha 13 de abril de 2023, emanado del Instituto de Salud Pública, mediante el cual se remitieron a la Fiscalía Centro Norte los protocolos de análisis

correspondientes a las NUE 6845534 y 6845529, documentos que dan cuenta de los diferentes resultados obtenidos de las muestras analizadas. Al respecto, el protocolo de análisis químico para el código de muestra 5037-2023-M1-3, emitido por el perito químico Basilio Chicahual Caniupán, concluye que la sustancia corresponde a cocaína clorhidrato 39%, lidocaína y cafeína. Asimismo, el protocolo de análisis químico del código para la muestra 5037-2023-M2-3, emitido por el mismo perito químico, establece que otra de las muestras analizadas contenía cocaína, lidocaína y cafeína.

En lo que respecta a la sustancia en polvo de color rosado incautada a la acusada Sepúlveda Mac-Lean al momento de su detención, el protocolo de análisis químico del código de muestra 5037-2023-M3-3, concluyó que dicha sustancia correspondía a Ketamina.

A su vez, los informes de efectos y peligrosidad para la salud pública emitidos por el perito químico Basilio Chicahual Caniupán respecto de la cafeína, cocaína, lidocaína, cocaína clorhidrato y ketamina, permitieron al Tribunal dimensionar los efectos nocivos que estas sustancias producen en el organismo humano y su potencial adictivo.

En lo que concierne a la cannabis sativa incautada, el acta de recepción N°154/2023, de fecha 15 de marzo de 2023, emanada del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, da cuenta de la recepción de 573 gramos, 107 gramos y 1,2 gramos, concordando con lo expuesto por los funcionarios policiales en cuanto a los diversos contenedores con sustancia vegetal de color verde incautados en el domicilio de los acusados. A su vez, mediante el oficio reservado N°096, de fecha 29 de junio de 2023, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente remitió a la Fiscalía Centro Norte los protocolos de análisis químico signados con el N°36 y asociados al oficio reservado N°36, para las muestras 1, 2 y 3, firmados por el perito químico Hermann Wurth Coronado, que concluyeron que la sustancia vegetal analizada correspondía a cannabis sativa. Finalmente, el documento titulado referido a las "características toxicológicas de la cannabis", emitido por el perito Hermann Wurth Coronado, permitió al Tribunal conocer los efectos específicos y nocivos de esta sustancia para la salud pública.

Asimismo, se incorporaron al juicio los certificados de depósito N°28 y N°29 del Banco Estado, por la suma de \$45.000.- y \$60.000.- respectivamente, correspondiendo la primera suma al dinero en efectivo incautado a la acusada María

Victoria Sepúlveda Mac-Lean al momento de su detención, y la segunda, al dinero en efectivo hallado en una caja metálica negra en el dormitorio principal del inmueble ubicado en Nueva Extremadura N°4966, departamento 401. Dichos montos, conforme a lo declarado por los funcionarios policiales Acuña Campos y Farías Vergara, presentaban características propias de dinero proveniente de transacción de droga al estar compuestos principalmente por billetes de baja denominación, lo que resulta consistente con la actividad de comercialización de drogas desarrollada por los acusados.

Esta adición complementaría la evidencia ya descrita, vinculando formalmente el dinero incautado con la documentación bancaria oficial y reforzando la conexión con la actividad ilícita investigada.

En lo que respecta al peritaje bioquímico realizado por la perito **Nieves Alejandra Aguirre Orellana**, del Laboratorio de Criminalística Central, se estimó que sus resultados no fueron determinantes para formar convicción sobre los hechos materia de la acusación. En efecto, la perito analizó tres evidencias levantadas desde el sitio del suceso, consistentes en un trozo de frazada polar, una bolsa de tela morada y una hoja metálica con filo, detectando solo en este último elemento presencia de sangre humana, mientras que en las dos primeras, pese a haber dado positivo para la reacción preliminar de Adler, no pudo confirmar la presencia de sangre humana en los ensayos inmunocromatográficos específicos. Se suma a lo anterior, la falta de determinación fidedigna de la pertenencia de aquella sangre humana, lo que impide efectuar una vinculación irrefutable con el acusado, sobre todo, si se consideran los dichos de Carla Pineda, quien aseguró que con posterioridad a los hechos Raúl le ordenó al peruano que limpiara el sitio del suceso, en un claro intento por no dejar rastros de lo ocurrido a la víctima.

En síntesis, y en concordancia con lo que se viene explicitando en los párrafos que preceden, el Tribunal estimó que cada una de las probanzas incorporadas por los acusadores apareció revestida de suficiente mérito probatorio, al evidenciar consistencia, coherencia y verosimilitud, lo que además apareció reforzado en el análisis en conjunto de los mismos medios, apreciándose clara coherencia interna entre todos ellos. En este sentido, la declaración anticipada de la víctima, pericia médico legal, testimonios policiales, evidencia material, comunicaciones entre los acusados, hallazgos en los inmuebles allanados y análisis químicos de las sustancias incautadas, se correspondieron con las lesiones que mantenía la víctima y que fueron

constatadas por la perito médico legal y el relato de las torturas sufridas, así como los mensajes explícitos intercambiados por los acusados que no solo confirman su participación en los hechos violentos, sino que además, evidenciaron una organización jerárquica dedicada al tráfico de drogas, que resultó palpable mediante la incautación de cantidades significativas de sustancias ilícitas, junto con elementos propios de la dosificación y comercialización, dinero en efectivo de baja denominación y las explícitas conversaciones sobre control, venta y distribución de droga extraídas de sus dispositivos móviles, que acreditan que los acusados se dedicaban de manera organizada y permanente al tráfico ilícito de estupefacientes, contexto en el cual se gestó el secuestro y las torturas infligidas a la víctima, como clara represalia por la desaparición de un paquete de droga.

En lo concerniente a la declaración de Carla Pineda Berríos, incorporada a través del testimonio de los funcionarios policiales Jara Ruiz y Fernández Rojas, este Tribunal le otorga valor probatorio, por cuanto constituye un relato obtenido legítimamente durante la investigación, cuyo contenido resulta coherente y concordante con los demás elementos probatorios, especialmente con las declaraciones de la víctima y las comunicaciones extraídas de los dispositivos móviles de los acusados.

Corresponde ahora valorar la declaración del acusado Eduardo Cerda Olea, concluyendo el Tribunal que su versión no logró instalar dudas razonables, estimándose su relato poco fiable al evidenciar múltiples contradicciones internas, además de haber sido sus afirmaciones desacreditadas por la contundente prueba de cargo presentada.

En efecto, mientras sostuvo haber vendido sus derechos de herencia del inmueble de 1990 a Nilton por \$1.000.000, intentando con ello desmarcarse de las actividades de tráfico de drogas, en otras partes de su declaración admitió que formaban una especie de "triumvirato" con la pareja, donde Victoria administraba el dinero. Asimismo, declaró inicialmente que solo fue testigo de los hechos ocurridos a Marcelo Alvarado desde lejos, pero luego admitió haber sostenido una conversación directa cuando éste estaba en el sillón, momento en que se habría limitado a decirle que no podía denunciar porque a él le cortarían la cabeza, negando haberlo amenazado, explicación que resultó inverosímil, no solo en el contexto de violencia que él mismo describe, sino a la luz de la prueba de cargo valorada precedentemente. Adicionalmente, la misma prueba demostró su vinculación con los hechos, en

especial, los mensajes extraídos del teléfono móvil evidenciaron que se refería a sí mismo como "administrador" del inmueble y reconocía a Nilton como "el mariscal", manteniendo con éste una evidente relación de confianza.

Unido a lo anterior, la testigo Carla Pineda, cuyo relato fue incorporado por el funcionario Jara, señaló expresamente que mientras ocurrían las agresiones a la víctima, Eduardo estaba en su pieza, dentro de la casa, confirmando tanto su presencia como su conocimiento directo de los hechos. Estas evidencias, sumadas al reconocimiento fotográfico efectuado por la víctima y el reporte en diversas instancias declarativas de la amenaza de muerte proferida por Cerda Olea en el contexto de las torturas, descartan completamente la tesis defensiva de este inculpado, demostrando que no solo tuvo pleno conocimiento del secuestro y agresiones infligidas a la víctima, sino que además participó activamente en la estructura delictiva dedicada al tráfico de drogas que operaba en el inmueble bajo su control.

En este sentido, el Tribunal no comparte ni advierte la supuesta inconsistencia entre los dichos de Pineda y de la víctima, según dio cuenta la defensa de Cerda, específicamente en relación a la posición y función que éste mantenía al momento de los hechos, por cuanto resulta irrefutable, incluso con la declaración de Pineda, que Cerda Olea estaba presente en el lugar de los hechos. Entonces, que Carla Pineda especificara que Cerda estaba en su pieza, en ningún caso excluye que hubiese salido en algún momento de ella y profiriera las amenazas relatadas por la víctima, lo que además es concordante con la interacción que el mismo acusado mencionó haber tenido con Marcelo, tergiversando el sentido de la amenaza que realizó. Por lo demás, Pineda también refirió haber salido en algún momento hacia el patio cuando escuchó a la víctima diciendo "me quema", lo que demuestra que tampoco presencié la totalidad de los hechos.

Unido a lo anterior, llamó la atención el persistente intento del acusado Cerda en proteger y desvincular a Nilton Dorador de su participación en los hechos de tortura hacia la víctima, indicando que en todo momento Nilton estuvo en un supuesto taller separado de la casa, lo que fue abiertamente contradicho por el testimonio de los funcionarios policiales Jara y Muñoz, quienes aseveraron que al interior del inmueble solo había habitaciones y cocina, en tanto en el exterior, únicamente existía una extensión de sitio correspondiente al patio del inmueble, descartando con ello la existencia de algún tipo de construcción destinada a taller. En el mismo sentido, el acusado vuelve a contradecirse cuando afirma que Nilton, que supuestamente estaba

en un taller -inexistente como se razonó-, lo llamó para avisarle que el almuerzo estaba listo, para luego agregar que "siempre almorzaban en la casa y cocinaban en la cocina de la casa, lo que resulta de suyo incongruente y resta total credibilidad al relato del encartado, por cuanto la cocina donde se preparaban los alimentos se encontraba dentro de la vivienda principal, lo que necesariamente implica que si fue Nilton quien le avisó que el almuerzo estaba listo, resulta lógicamente imposible que este último se mantuviera separado del lugar donde se estaban cometiendo las agresiones, como pretende hacer creer el acusado, y por ende permite sostener que Nilton se encontraba al interior del mismo inmueble donde se estaban desarrollando los hechos de violencia.

En igual sentido, en lo que respecta a la acusada María Victoria Sepúlveda, su declaración develó inconsistencias que comprometen su credibilidad, ya que Inicialmente sostuvo que aquélla administraba los dineros pero no venía a la casa debido a la cantidad de tierra que había en el lugar por las obras que se estaban ejecutando, intentando con ello desvincularla físicamente del lugar de los hechos. Sin embargo, al referirse a la supuesta agresión que el encartado habría sufrido con un destornillador por parte de Raúl, manifestó que Victoria los llamó a todos y les dijo que nadie le podía pegar, dándole plazo a Raúl para irse de la casa, lo que confirma que la mujer concurría a dicho inmueble, ejerciendo incluso autoridad disciplinaria y una posición jerárquica superior al resto de las personas a las que convocó, elementos que confirman su ubicación en el lugar el día de los hechos.

Desde esa perspectiva, la prueba documental incorporada por la defensa de Cerda Olea en nada hace variar lo anteriormente expuesto, ya que, desde una perspectiva jurídica, si se pretendía acreditar la enajenación del inmueble, la mera escritura de cesión de derechos no es la vía idónea para ello cuando se encuentra desprovista de la correspondiente inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Unido a lo anterior, en los hechos, apareció claramente demostrado que el acusado Cerda era reconocido por quienes frecuentaban el inmueble como el dueño de la propiedad y quien mantenía control sobre el inmueble.

En consecuencia, y basado en los mismos argumentos que se explicitan, se desestiman las alegaciones expuestas por la defensa del acusado Cerda Olea, en cuanto a pretender desvincularlo de los actos que le fueron imputados, no logrando desvirtuar las contundentes probanzas presentadas por los acusadores. En lo concerniente a su alegación relacionada con la fragmentación de los hechos para

efectos de pretender que la amenaza proferida a la víctima se habría realizado una vez producido el agotamiento del delito de secuestro, se dirá que aquello resulta irrelevante, pues, independientemente de si aquella se realizó durante las agresiones o inmediatamente después, quedó demostrado que se materializó en el contexto del secuestro, incluso durante el periodo y lugar en que la víctima se mantuvo en cautiverio al interior del domicilio de Radal, lo que demuestra el dominio funcional que ejercían los acusados sobre aquél. Igualmente se desestima la alegación relativa a la ausencia de drogas en el inmueble de Radal, por cuanto la estructura organizativa para la comercialización de droga quedó plenamente acreditada, estableciéndose roles jerárquicos entre los acusados, y una dinámica de distribución consistente en trasladar las sustancias ilícitas desde Nueva Extremadura hacia Radal para su comercialización, siendo esta operativa perfectamente compatible con la falta de acopio permanente de droga en el segundo inmueble. Por último, su pretensión en cuanto a que la declaración de su representado debiese interpretarse en un contexto de temor hacia los coimputados, careció de total sustento probatorio, no aportándose ninguna evidencia que sustentara tal aseveración.

Respecto a las alegaciones de la defensa de Dorador y Sepúlveda, serán desestimadas por las mismas razones antes expuestas, considerando además que la prueba incorporada posibilitó demostrar con claridad la estructura jerárquica en la que Dorador operaba como líder, sin necesidad de ejecutar personalmente todas las acciones para mantener el dominio funcional del hecho, siendo suficientes para llevarlo a cabo las instrucciones que dispuso y su presencia directa durante parte de las agresiones. El argumento relativo a que las comunicaciones telefónicas demostraban que Dorador más bien frenaba las iniciativas violentas de Raúl, no hace sino confirmar su posición de mando y su capacidad de dirigir el actuar de sus subordinados, incluido el fallecido Raúl Silva.

De otro lado, se dirá que las supuestas contradicciones en el testimonio de la víctima como en el del resto de los testigos que depusieron en juicio, evidenciadas por la defensa a propósito de la secuencia exacta de los hechos, constituyen diferencias menores y esperables en cualquier relato sobre eventos traumáticos y complejos, sin que afecten lo sustancial del testimonio de la víctima, que además obtuvo corroboración en el resto de las probanzas incorporadas.

Finalmente, el argumento de la defensa de los acusados Dorador y Sepúlveda, relacionados con la falta de informes médicos específicos para algunas lesiones que

supuestamente estarían presentes con anterioridad a los hechos resulta irrelevante atendida la contundencia de la prueba pericial médica y fotográfica que permitió constatar inequívocamente la relación y compatibilidad de las lesiones con el relato de la víctima, lo que permitió además comprobar la gravedad de las mismas.

DUODÉCIMO: Hecho establecido. Que, luego de valorada la prueba rendida en estrados, es posible tener por acreditado, más allá de toda duda razonable los siguientes hechos:

Hecho 1: El día 07 de enero de 2023 aproximadamente a las 16:00 horas, mientras la víctima J.M.A.F., se encontraba trabajando cuidando autos en la intersección de calle Jujuy con Salvador Gutiérrez, en la comuna de Quinta Normal, al lugar llegó un automóvil marca Hyundai, color gris, desde el cual descendieron dos sujetos desconocidos, quienes subieron por la fuerza a la víctima al vehículo, señalando que debía ir con ellos para arreglar un problema, trasladándolo contra su voluntad hasta el inmueble ubicado en calle Radal N°1990, comuna de Quinta Normal, lugar donde le sustrajeron su billetera que contenía su cédula de identidad y \$22.000 (veintidós mil pesos) en efectivo, además, fue increpado por estos dos sujetos, quienes le señalaron que debía asumir el robo de un paquete de droga extraviado días previos, propinándole golpes de pies y puño en reiteradas ocasiones, utilizando, en algunas de ellas, diferentes elementos contundentes. Posteriormente por instrucciones de Nilton Israel Dorador Morales, fue colgado y amarrado de pies y manos y le extrajeron uno de sus dientes superiores con un alicate, ingresando al lugar el Dorador Morales, quien lo amenazó para que asumiera el robo de la droga, y ante la negativa de la víctima, lo apuñaló con un cuchillo en su glúteo derecho, ordenando los otros individuos que continuaran con las agresiones, quienes lo obligaron a beber alcohol, mientras que uno de ellos cortó la primera falange del dedo anular de su mano izquierda utilizando un cuchillo.

Posteriormente llegó hasta el lugar la pareja de Dorador Morales, María Victoria Sepúlveda Mac-Lean, quien vertió agua hirviendo sobre su espalda, cuello, piernas y brazos de la víctima en dos ocasiones, mientras este se encontraba en el suelo maniatado de pies y manos. Adicionalmente en el lugar se encontraba Eduardo Antonio Cerda Olea, encargado del domicilio, quien, mientras presenciaba las agresiones sufridas por la víctima, lo amenazaba indicándole que le “cortaría la cabeza si denunciaba lo ocurrido.

Finalmente, la víctima fue trasladada hasta su carpa ubicada en calle Jujuy con Salvador Gutiérrez, de la misma comuna, desde donde logró escapar aproximadamente a las 06:00 horas del día 08 de enero de 2023, solicitando ayuda a un vecino, quien lo trasladó hasta el Consultorio Garín, ubicado en calle Janequeo N°5662, comuna de Quinta Normal, donde le realizaron los primeros auxilios, y luego de pasar por otros recintos hospitalarios, finalmente fue internado en la Clínica INDISA debido a la gravedad de sus lesiones, toda vez que resultó con el 24% de su cuerpo con quemaduras, sufriendo además lesiones producto de haber sido colgado para las torturas correspondientes a: “desgarro del muslo Bíceps, rotura de ancho parcial y grosor subtotal del supraespinoso, tendinosis del tendón subescapular, irregularidad cortical del contorno anterosuperior de la cabeza humeral”, todas de carácter grave, permaneciendo internado por 38 días, siendo dado de alta el día 17 de febrero de 2023.

Hecho 2: Dando cumplimiento a una orden de detención, entrada, registro e incautación debidamente autorizada por el 6° Juzgado de Garantía de Santiago, con fecha 14 de marzo de 2023, se incautaron las siguientes especies, en poder de los imputados que se indican:

En calle Nueva Extremadura N°4966, departamento N°401, comuna de Quinta Normal, el 14 de marzo del año 2023 alrededor de las 14:20 horas, mientras se ejecutaba una vigilancia a dicha propiedad, María Victoria Sepúlveda Mac-Lean, llegó hasta la entrada del edificio anteriormente indicado, siendo detenida, incautando las siguientes especies que se encontraban al interior de un banano que portaba:

1) 06 bolsas de nylon transparentes, contenedoras de una sustancia en polvo color rosado 2,38 gramos.

2) 02 dos bolsas de nylon transparentes contenedoras de cannabis sativa, con un peso de 1,92 gramos.

3) \$45.000 (cuarenta y cinco mil pesos) en dinero en efectivo.

Al ejecutar la orden de entrada, registro e incautación al domicilio, que era utilizado por Sepúlveda Mac-Lean y Dorador Morales para guardar sustancias ilícitas destinadas a su distribución, se detuvo a Dorador Morales, incautando desde el interior del domicilio las siguientes especies:

1) 01 balanza digital kitchen scale color blanca.

2) 01 chaleco de seguridad anti corte, color negro (con características de chaleco antibalas).

3) 01 frasco de vidrio transparente con tapa de color amarillo, contenedora de una sustancia en polvo color blanco con similares características a cocaína base con un peso de 205,67 gramos.

4) 01 bolsa de género color negra, contenedora de 08 bolsas transparentes que en su interior mantienen bolsas de menor tamaño utilizadas comúnmente para dosificación de droga.

5) \$60.000 (sesenta mil pesos) en dinero en efectivo.

6) 01 Frasco de vidrio, con tapa blanca con diseño de frutas de colores, contenedora de una sustancia vegetal color verde correspondiente a Cannabis Sativa con un peso de 48,63 gramos, 01 pote de plástico transparente, con tapa negra contenedora de una sustancia vegetal color verde correspondiente a Cannabis Sativa con un peso de 57,39 gramos, 01 frasco de vidrio, con tapa color dorado, contenedora de una sustancia vegetal color verde correspondiente a Cannabis Sativa con un peso de 18,64 gramos.

7) 01 bolsa de nylon de color blanco, contenedora de bolsas de menor tamaño utilizadas comúnmente para dosificación de droga, 01 balanza digital, color gris, sin marca ni modelo visible.

8) 01 frasco de vidrio, con tapa de color morado contenedora de una sustancia vegetal color verde contenedora de Cannabis Sativa, con un peso de 439,73 gramos, 01 frasco de vidrio, transparente, con tapa de color verde, contenedora de una sustancia vegetal color verde correspondiente a Cannabis Sativa con un peso de 135.12 gramos.

9) 01 celular marca Motorola, sin modelo visible, color azul, con su pantalla trizada, 01 celular marca Samsung, sin modelo visible, IMEI N°01 356407111684962, N° 02 35640811168496-0 color grafito, con su carcasa plástica transparente con bordes azul y amarillo.

En calle Radal del Obispo Francisco Anabalón Duarte N°1990, comuna de Quinta Normal: El 14 de marzo del año 2023, alrededor de las 14:25 horas, se procedió a ejecutar orden de entrada, registro e incautación a dicho domicilio, deteniendo en su interior a Eduardo Antonio Cerda Olea, incautando en su poder 1 teléfono celular marca HUAWEI modelo Y6 2019, de color azul, con simcard de la compañía WOM.

En la revisión del inmueble se procedió a incautar las siguientes especies:

1) 1 hervidor eléctrico marca SINDELEN modelo HA-3300, color blanco con detalles gris.

2) 1 hervidor eléctrico marca RECCO, modelo RHE-25GRAND, color blanco, tapa y mango con detalles gris.

Finalmente, producto del trabajo del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI se procedió a levantar 3 sobres contenedores de 1 trozo de frazada polar con MPR Adler positivo, 1 bolso de género morado con MPR Adler positivo y 1 hoja metálica de filo con MPR, los cuales dan cuenta de orientación química a la presencia de sangre.

DÉCIMO TERCERO: Calificación jurídica. En primer término, los hechos que han resultado acreditados bajo el numeral primero del considerando que precede, configuran el delito de secuestro agravado previsto y sancionado en el artículo 141 inciso 4° del Código Penal. En efecto, se estiman concurrente todos y cada uno de los elementos del tipo penal referido, en especial, se acreditó la privación de libertad de que fue objeto la víctima de iniciales J.M.A.F, viéndose privada de su libertad ambulatoria mediante violencia física a través del accionar de dos sujetos que lo subieron por la fuerza a un vehículo y lo trasladaron contra su voluntad hasta el inmueble ubicado en calle Radal N°1990, en la comuna de Quinta Normal, lugar donde permaneció en cautiverio durante varias horas, todo lo cual constituye una detención sin fundamento legal alguno que vulneró su derecho fundamental a la libertad personal. De igual forma, se demostró la concurrencia del elemento subjetivo, al existir plena consciencia y voluntad de privar de libertad a la víctima, como medio instrumental para obtener su confesión respecto de un supuesto robo de un paquete de droga, verificándose una clara finalidad que trasciende la mera privación de libertad.

Asimismo, se configuró la hipótesis calificante establecida en el inciso 4° del artículo 141 del Código Penal, por cuanto del secuestro resultó un daño grave en la persona del secuestrado, como postula la norma, materializado en lesiones de extrema gravedad como quemaduras en el 24% del cuerpo, fracturas, rotura de tendones, amputación parcial de un dedo, que requirieron 38 días de hospitalización y que, según la pericia médico legal, habrían resultado mortales sin atención médica oportuna.

El bien jurídico protegido en este delito resulta ser la libertad ambulatoria y la seguridad individual, ambos afectados en el caso en análisis, donde además existió una grave vulneración a la integridad física y dignidad de la persona secuestrada.

En mérito de lo antes expuesto, se rechaza la alegación de la defensa de Dorador y Sepúlveda, en cuanto pretendió la calificación del delito de lesiones como figura autónoma e independiente del delito de secuestro, teniendo además en consideración que las mismas se provocaron como medio de ejecución y consecuencia natural del delito de secuestro calificado, como quedó acreditado.

En lo que respecta a los hechos descritos bajo la referencia “Hecho 2”, configuran el delito de tráfico ilícito de drogas del artículo 3 de la Ley 20.000. en relación con el artículo 1 del mismo texto legal, al concurrir todos los elementos del tipo legal en comento, a saber, la posesión de sustancias ilícitas sin autorización, al verificarse la tenencia de diversas sustancias estupefacientes (cocaína base, cannabis sativa y ketamina) en poder de los acusados, sin contar con la debida autorización, configurándose así una de las conductas típicas o verbos rectores contemplados por la norma, acreditándose que la posesión estaba destinada inequívocamente a la comercialización, como lo evidencia la presencia de elementos típicos de distribución (balanzas digitales, bolsas dosificadoras, dinero en efectivo de baja denominación), comunicaciones entre los acusados que revelaron una estructura organizada para la venta de estas sustancias, además de las dinámicas advertidas en las vigilancias discretas al domicilio de calle Radal.

La diversidad de droga total incautada (205,67 gramos de cocaína base, aproximadamente 700 gramos de cannabis sativa y 2,38 gramos de ketamina) excede lo que podría considerarse destinado al consumo personal, como también descarta la figura privilegiada del artículo 4° de la Ley 20.000. Al respecto, cabe tener presente que para determinar la calificación jurídica entre tráfico y microtráfico debe considerarse no solo la cantidad y diversidad de las sustancias comprometidas, sino también el contexto operacional y la organización existente. En este caso, la cantidad de droga incautada, la estructura jerárquica evidenciada en los mensajes extraídos de los dispositivos móviles, la diversificación de sustancias, la territorialidad del negocio ilícito, la violencia empleada en el contexto de dicha actividad, la tenencia de múltiples elementos de dosificación, el uso de diversos inmuebles para el almacenamiento y distribución, y las comunicaciones que confirman los roles específicos que mantenían los acusados dentro de esta estructura organizada, constituyen elementos claros de una forma de operar que trasciende el pequeño tráfico. Por esta razón, se rechazan las alegaciones de las defensas en cuanto pretendieron otorgar a los hechos una calificación diversa, amparada en la figura privilegiada del delito de tráfico.

Finalmente se dirá que en ambos delitos el grado de desarrollo correspondió al de consumación, ya que en el primer caso se materializó completamente la privación de libertad de la víctima mediante violencia, manteniéndola en cautiverio contra su voluntad y provocándole graves lesiones corporales que configuran la hipótesis agravada, y respecto al segundo ilícito, se constató la posesión efectiva de sustancias estupefacientes en cantidades significativas junto a elementos para su dosificación y comercialización.

DÉCIMO CUARTO: Participación. Que, la intervención punible de los tres acusados quedó enmarcada en los parámetros de la autoría directa del artículo 15 N°1 del Código Penal, lo que ha quedado plenamente acreditado mediante la prueba que ha sido analizada en el acápite relativo a la valoración de los hechos, evidenciándose el dominio funcional y la participación específica de cada uno de ellos en la realización de los hechos que constituyeron los ilícitos acreditados.

En el caso del secuestro agravado, se demostró que Dorador Morales fue quien ordenó el secuestro de la víctima y participó directamente en las agresiones y Sepúlveda Mac-Lean contribuyó también como ejecutora de las torturas más graves inferidas a la víctima, lo que quedó suficientemente acreditado.

En el caso específico del acusado Eduardo Cerda Olea, si bien, no participó directamente de las conductas iniciales, como la privación de libertad y lesiones inferidas a la víctima, su intervención responde claramente a la autoría directa en virtud de la teoría del dominio funcional del hecho, al haber existido un acuerdo conjunto con el resto de los acusados para la realización consciente del hecho típico, contribuyendo cada uno a su ejecución. Desde esta perspectiva, correspondió a Cerda Olea la función de facilitar el inmueble donde se mantuvo cautiva la víctima, siendo aquello un aporte esencial sin el cual no habrían podido ejecutarse las torturas que resultaron acreditadas, además, mantuvo presencia física durante el desarrollo de estas agresiones legitimando con ello el actuar de los demás intervinientes y posibilitando la continuidad de las acciones. Por último, mediante la amenaza directa a la víctima, indicándole que "le cortarían la cabeza si denunciaba", ciertamente contribuyó a prolongar los efectos del delito procurando resguardar la impunidad de aquellas acciones vejatorias realizadas a la víctima.

En lo que respecta al tráfico de drogas, los tres acusados también ejecutaron las conductas ilícitas en base a una estructura jerárquica, con clara división de

funciones destinadas a alcanzar un fin específico, cual es la comercialización de sustancias ilícitas.

DÉCIMO QUINTO: Audiencia artículo 343 Código Procesal Penal. Que, abierto debate en los términos previstos en el artículo 343 del Código Procesal Penal, respecto a la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y lo relativo a la determinación y cumplimiento de la pena, el **Ministerio Público** incorporó los extractos de filiación de los acusados. En el caso de Nilton Israel Dorador Morales, indicó que registraba una anotación de 4 de diciembre de 2012, por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, condenado a 61 días de presidio menor en su grado mínimo y al pago de 1 UTM (hecho del año 2009). Además, dio cuenta de otra anotación por el mismo delito, con igual condena, y una anotación del año 2019 por el delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida, registrando una condena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo.

Respecto a Eduardo Cerda Olea, indicó que mantenía una anotación del Octavo Juzgado del Crimen de San Miguel, de 20 de septiembre del año 2004, por el delito de lesiones menos graves, siendo en dicha oportunidad condenado al pago de 11 UTM.

En cuanto a la acusada María Victoria Sepúlveda Mac-Lean, expuso que registraba una notación del año 2004, emanada del Tercer Juzgado de Policía Local de Maipú, como autora de un hurto falta, imponiéndosele la sanción de 1 UTM.

Estimó que ninguno de los acusados mantenía irreproachable conducta anterior. Asimismo, indicó que no se configuraba la atenuante de colaboración sustancial al no haber colaborado en el esclarecimiento de los hechos. Solicitó para los tres acusados la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por el delito de secuestro y 12 años de presidio mayor en su grado medio y multa de 100 UTM por el delito de tráfico de drogas, además del comiso de las especies incautadas y el registro de huella genética.

La parte **querellante** adhirió a lo expuesto por el Ministerio Público, coincidiendo en que los acusados no contaban ninguna circunstancia atenuante.

A su turno, **la defensa de Eduardo Cerda** solicitó que se reconociera a su representado la circunstancia atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal, argumentando que su representado invocó antecedentes que permitieron esclarecer los hechos que resultaron acreditados, dando cuenta de su ubicación en el sitio del suceso, haber presenciado en algún momento la agresión e interactuado con la

víctima cuando fue liberada, recalcando que Cerda renunció a su derecho a guardar silencio, tanto en sede investigativa como en juicio. Solicitó la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio por el delito de secuestro, considerando que no había participado propiamente tal de las lesiones y de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de tráfico, ya que su participación se circunscribió a la facilitación del inmueble. También pidió que se rebajara prudencialmente la multa y se le eximiera de costas por haber sido representado por la Defensoría Penal Pública.

La **defensa de Nilton Dorador y María Victoria Sepúlveda** dio por reproducido las alegaciones de la defensa de Cerda, solicitando que las penas aplicadas a sus representados fueran en el mínimo de los grados, y que la multa no excediera de 10 UTM, concediéndoseles parcialidades para el pago, habida consideración de la privación de libertad de que fueron objeto durante la investigación.

Otorgada la palabra al **fiscal**, se opuso al reconocimiento de la atenuante del artículo 11N°9 del Código Penal, insistiendo en que no había ningún tipo de colaboración en los términos expuestos por la norma, sobre todo, considerando las teorías absolutorias y diferentes a lo que había sido la teoría del caso del Ministerio Público.

En los mismos términos, el **querellante** se opuso a la atenuante de colaboración, señalando que la declaración de Cerda carecía de la sustancialidad requerida. Citó al efecto una sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco (sentencia RIT 302-2023), que establecía que no era suficiente la mera renuncia al derecho a guardar silencio, debiendo aportar antecedentes concretos de los que carezca el ente persecutor, ya que, de otra forma, bastaría con declarar en el juicio oral para obtener una morigeración de pena, escapando aquello del espíritu e intención del legislador.

DÉCIMO SEXTO: Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Que, el Tribunal rechaza la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos solicitada por la defensa de Eduardo Cerda Olea, por cuanto su declaración no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 11 N°9 del Código Penal. Estima el Tribunal que la mera renuncia al derecho a guardar silencio no constituye *per se* una colaboración eficaz, sobre todo, si se considera que el encartado Cerda, lejos de aportar antecedentes relevantes que los persecutores desconocieran, sostuvo una teoría alternativa absolutoria y contradictoria con la prueba de cargo, presentando un relato que el Tribunal calificó como inverosímil, acomodaticio y contradictorio, intentando en todo momento desvincularse de los hechos imputados y minimizar su

participación y la de los coacusados. En este sentido, no basta cualquier información para configurar esta atenuante, sino que se requiere un aporte efectivo y significativo al esclarecimiento de los hechos, circunstancia que no ocurrió en la especie.

Que, el Tribunal desestima la agravante del artículo 12 N°4 del Código Penal, considerando para ello que el delito de secuestro del inciso cuarto del artículo 141 del Código Penal ya incorpora como elemento constitutivo el grave daño en la persona del ofendido. En efecto, las quemaduras en el 24% del cuerpo de la víctima, calificadas como gran quemado según el testimonio pericial, además del resto de las lesiones que resultaron acreditadas constituyen precisamente el fundamento para subsumir la conducta en este tipo calificado. Considerar estas mismas lesiones para configurar adicionalmente la agravante de ensañamiento vulnera el principio non bis in ídem, pues implica valorar doblemente un mismo hecho para agravar la responsabilidad penal del imputado.

Por los mismos fundamentos se rechaza la agravante del artículo 19 letra b) de la Ley 20.000, habida consideración que la violencia ejercida contra la víctima ya ha sido valorada y sancionada como constitutiva del delito de secuestro calificado, por lo que no puede considerarse nuevamente como agravante del delito de tráfico.

DÉCIMO SÉPTIMO: Determinación de la pena. Que para los efectos de determinación de la pena se tendrá presente que el delito de secuestro calificado del artículo 141 inciso cuarto del Código Penal contempla una pena de presidio mayor en su grado medio a máximo, en tanto, el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, tipificado en el artículo 3 de la Ley 20.000, contempla la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de 40 a 400 UTM.

Al no concurrir circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, el Tribunal se encuentra facultado para recorrer toda la extensión de la pena, pudiendo aplicarla en cualquiera de sus grados.

Para efectos de determinación de la pena en el delito de secuestro calificado se tendrá en consideración la mayor extensión del mal causado a la víctima, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal, teniendo presente que las probanzas rendidas en juicio posibilitaron acreditar un conjunto de acciones lesivas claramente diferenciadas, en las que los acusados Dorador y Sepúlveda provocaron daños físicos en la víctima cuyos efectos se extendieron en el tiempo, tal como señaló la perito Negretti al clasificar los diversos tipos de intensidad de dolor según la lesión provocada, sin que estos acusados -causantes de sus principales lesiones- le

prestaran ningún tipo de ayuda, demostrando un total desprecio por la vida y dignidad humana, haciendo incluso burla de las agresiones y torturas, debiendo el mismo afectado buscar auxilio una vez que logró escapar, todo lo cual agravó el riesgo para su integridad física, factores que este Tribunal debe necesariamente considerar para la determinación del quantum de la pena respecto de estos dos acusados.

Se rebajará prudencialmente la sanción pecuniaria a imponer a los acusados, considerando para ello que han permanecido privados de libertad durante la investigación y que deberán cumplir las sanciones que se les impondrán también en el encierro.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal, corresponde imponer todas las penas correspondientes a las diversas infracciones, debiendo cumplirse copulativamente, comenzando por las más graves.

DÉCIMO OCTAVO: Penas sustitutivas. Que, los encartados deberán cumplir efectivamente las penas que se impondrán, sin que puedan optar a alguna sustitución establecida en la Ley 18.216, atendida la extensión de las sanciones corporales, que superan los límites establecidos en dicha normativa.

DÉCIMO NOVENO: Comiso. Se decreta el comiso de todas las especies incautadas durante la investigación por guardar relación directa con la comisión de los hechos o sus efectos patrimoniales ilícitos, incluyendo sustancias estupefacientes, dinero, elementos de dosificación y almacenamiento, hervidores y demás objetos utilizados en la comisión de los delitos, conforme lo establece el artículo 31 del Código Penal y el artículo 45 de la Ley 20.000.

VIGÉSIMO: Costas. Que, en cuanto a las costas, este Tribunal estima procedente eximir a los sentenciados de su pago, en virtud de lo dispuesto en el artículo 47 del Código Procesal Penal y el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales. En el caso del sentenciado Eduardo Cerda Olea, esta decisión se fundamenta en que fue patrocinado por la Defensoría Penal Pública, lo que permite presumir su falta de recursos económicos para costear su propia defensa y respecto de los sentenciados Nilton Israel Dorador Morales y María Victoria Sepúlveda Mac-Lean, la exención se fundamenta en que han permanecido privados de libertad durante la investigación y deberán cumplir las penas privativas de libertad de manera efectiva por periodos prolongados, todo lo cual permite inferir razonablemente que no contarán con los medios económicos necesarios para solventarlas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 14 N°1, 15 N°1, 18, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 50, 68, 69, 70, 74 y 141 inciso cuarto del Código Penal; artículos 1, 3, 19 y 45 de la Ley 20.000; artículos 1, 4, 45, 46, 47, 295, 297, 340, 341, 342, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal; artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales; y Ley 19.970 sobre Registro de Huella Genética, **SE DECLARA:**

I.- Que se condena a **NILTON ISRAEL DORADOR MORALES** y a **MARÍA VICTORIA SEPÚLVEDA MAC-LEAN**, ya individualizados, a sufrir la pena individual de **DIECIOCHO AÑOS** de **presidio mayor en su grado máximo**, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en tanto autores del delito **consumado** de **secuestro calificado**, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso cuarto del Código Penal, cometido el 7 de enero de 2023, en la comuna de Quinta Normal.

II.- Que se condena a **EDUARDO CERDA OLEA**, ya individualizado, a sufrir la pena de **DIEZ AÑOS Y UN DÍA** de **presidio mayor en su grado medio**, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en tanto autor del delito **consumado** de **secuestro calificado**, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso cuarto del Código Penal, cometido el 7 de enero de 2023, en la comuna de Quinta Normal.

III.- Que se condena a **NILTON ISRAEL DORADOR MORALES**, **MARÍA VICTORIA SEPÚLVEDA MAC-LEAN** y **EDUARDO CERDA OLEA**, ya individualizados, a sufrir la pena individual de **CINCO AÑOS Y UN DÍA** de **presidio mayor en su grado mínimo**, y al pago de una multa de **DIEZ UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES**, además de las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en tanto autores del delito consumado de **tráfico ilícito de estupefacientes**, previsto y sancionado en el artículo 3° de la Ley 20.000, cometido el 14 de marzo de 2023, en la comuna de Quinta Normal.

Se concede a los sentenciados diez cuotas mensuales de igual valor para el pago de la sanción pecuniaria impuesta, debiendo enterarse la primera de ellas dentro

del mes siguiente a la fecha en que la presente sentencia quede ejecutoriada, y las restantes cuotas el mismo día de los meses sucesivos.

IV.- Que atendida la extensión de las penas corporales impuestas, no se concede a los sentenciados ninguna de las penas sustitutivas de la Ley 18.216, debiendo cumplir efectivamente las penas privativas de libertad impuestas, comenzando por la más gravosa. Les servirán de abono los días que han permanecido privados de libertad por esta causa, y que ascienden, en el caso de Nilton Dorador: **260 días**; María Victoria Sepúlveda **801 días**; y Eduardo Cea: **801 días**, según da cuenta el certificado emanado de la Jefa de Unidad de Causas de este Tribunal.

V.- Que de conformidad con lo dispuesto en el considerando Décimo Noveno de esta sentencia, se decreta el comiso de todas las especies incautadas durante la investigación.

VI.- Que se exime a los sentenciados del pago de las costas de la causa, de conformidad a lo razonado en el considerando final de esta sentencia.

VII. Dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N°19.970, para lo cual se tomarán a los sentenciados las muestras biológicas necesarias para determinar sus huellas genéticas e incluirlas en el Registro de Condenados.

VIII.- Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, debiendo en su oportunidad remitirse copia autorizada al Juzgado de Garantía que corresponda.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por la Magistrado Paulina Sariego Egnem.

RIT N°: 431-2024

RUC N°: 2300200789-4

Dictada por las Magistradas Titulares del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago María Alejandra Cuadra Galarce, María José García Ramírez y Paulina Sariego Egnem.

No firma la presente sentencia la magistrada Paulina Sariego Egnem por encontrarse haciendo uso de feriado legal.